



# GACETA DEL CONGRESO

## SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVIII - N° 1033

Bogotá, D. C., viernes, 18 de octubre de 2019

EDICIÓN DE 40 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

# SENADO DE LA REPÚBLICA

## PROYECTOS DE LEY

### PROYECTO DE LEY NÚMERO 225 DE 2019 SENADO

*por medio de la cual se establece el régimen sancionatorio del sector transporte, se determina el procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones.*

El Congreso de la República

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

#### Objeto, ámbito de aplicación, principios, carácter de las normas y definiciones

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto establecer el régimen sancionatorio del sector transporte, el procedimiento administrativo sancionatorio, así como las disposiciones relacionadas con la protección a los usuarios del servicio de transporte.

Artículo 2°. *Ámbito de aplicación.* La presente ley es aplicable a la actividad transportadora y portuaria, contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, operación y/o mantenimiento de la infraestructura vial, férrea, marítima, fluvial, aeroportuaria y portuaria; y los servicios conexos y complementarios a estos, así como a las relaciones de consumo existentes en el sector transporte.

Además, aplicará a los fabricantes, importadores, ensambladores y comercializadores de equipos y vehículos destinados al servicio público, a los propietarios y conductores de los equipos y vehículos destinados al servicio público, a las empresas de transporte público, a los sujetos que administran o ejecutan programas asociados a la prestación del servicio público de transporte, a los generadores de

carga, las autoridades de tránsito, los organismos de tránsito, los organismos de apoyo al tránsito, las empresas que administran u operan el sistema de control y vigilancia, las plataformas tecnológicas que promuevan o faciliten la prestación de servicios de transporte terrestre, desintegradoras, y en general a las personas que violen o faciliten la infracción a las normas del sector transporte.

Artículo 3°. *Principios.* La interpretación y aplicación de la presente ley se efectuará a la luz de los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, especialmente la garantía del debido proceso, el derecho de defensa, la responsabilidad subjetiva, la favorabilidad, la presunción de inocencia, la tipicidad, la legalidad, y la carga de la prueba.

Artículo 4°. *Carácter de las normas.* Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. La Ley 1ª de 1991, Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 769 de 2002, la Ley 1242 de 2008, el Código de Comercio y el Código Civil, o las normas que las adicionen, modifiquen o deroguen serán aplicables a las situaciones no reguladas por la presente ley, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis. En materia procesal, lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012 o las normas que las adicionen, modifiquen o deroguen serán aplicables a las situaciones no reguladas por la presente ley, en cuanto no fueren incompatibles.

Artículo 5°. *Consecuencias de la infracción de las normas de transporte.* La infracción de las normas de transporte dará lugar una o varias de las siguientes responsabilidades:

5.1. Responsabilidad administrativa individual, ante las autoridades de supervisión en los términos de esta ley.

- 5.2. Responsabilidad patrimonial, ante los jueces de la República en los términos de la ley.
- 5.3. Responsabilidad penal individual, ante los jueces penales en los términos de la Ley 599 de 2000 y las demás que la modifiquen.
- 5.4. Responsabilidad laboral y de seguridad social, ante los jueces laborales en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y Procedimiento Laboral.

Artículo 6°. *Definiciones.* Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

- 6.1. **Actividad transportadora:** Conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas y/o bienes, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades de transporte competentes.
- 6.2. **Administrador de infraestructura de transporte:** Es la persona encargada de la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación, prestación de servicios, administración y/o explotación de la infraestructura de transporte y servicios conexos y complementarios.
- 6.3. **Documentos de tránsito:** Son los documentos exigidos por la normatividad de tránsito, incluyendo pero no limitados a la licencia de conducción, el certificado de revisión técnico mecánica, la licencia de tránsito del vehículo, la póliza de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, licencia de tripulantes, documento que dé cuenta de la inspección técnica, patente de navegación, póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y los demás exigidos por la normatividad vigente.
- 6.4. **Documentos de transporte:** Son los documentos que sustentan la operación de transporte entre los cuales se encuentran la tarjeta de operación, la planilla de despacho, la planilla de viaje ocasional, el extracto de contrato, el manifiesto de carga, y los demás exigidos por la normatividad vigente.
- 6.5. **Equipo de transporte:** Unidad operativa autopropulsada o no, que permite el traslado de personas y/o bienes, por cualquiera de los modos de transporte, pueden ser vehículos, aeronaves, embarcaciones, naves, equipos férreos, entre otros.
- 6.6. **Obstrucción de las actuaciones administrativas:** Se entiende que hay obstrucción cuando se impide o dificulta la realización de las actuaciones administrativas, diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación administrativa. Existe obstrucción, entre otras, cuando: (i) no se permita la realización de la visita de inspección o

diligencia, (ii) se interrumpa la visita de inspección o diligencia sin justa causa, después de iniciada, (iii) no se entregue la información o los documentos requeridos, (iv) se oponga reserva o confidencialidad de documentos para no entregarlos, (v) renuencia u obstrucción a permita la práctica de testimonios, interrogatorios u otras pruebas, (vi) se altere la documentación requerida por la entidad, o (viii) destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba dentro de la actuación administrativa.

- 6.7. **Pasajero perturbador:** Es aquella persona natural que no acata ni respeta las instrucciones dadas por el personal de la terminal, las reglas de este, y/o generen conductas que perturben el orden o la disciplina en la terminal o a bordo del medio utilizado para transportarse.
- 6.8. **Servicios complementarios:** Son todas aquellas actividades que se realizan para facilitar el servicio de transporte, tales como el recaudo de las tarifas, el control, la gestión de flota, las comunicaciones en los sistemas de transporte, entre otros.
- 6.9. **Servicio público de transporte:** Es aquel que se ofrece a la comunidad o terceros para satisfacer sus necesidades de movilización de personas o cosas de un lugar a otro, a cambio de una contraprestación, de acuerdo con los equipos y la normatividad existente para ello.
- 6.10. **Transporte privado:** Es aquel dispuesto por personas naturales o jurídicas para satisfacer sus necesidades particulares, propias o familiares, utilizando equipos propios y para el que no existe una contraprestación a cambio.
- 6.11. **Usuario del sector transporte:** Será considerado usuario:
  - a) Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera el tiquete o sea beneficiario del mismo.
  - b) Toda persona natural que es transportada de un lugar a otro, en virtud de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.
  - c) Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice el servicio público de transporte de carga, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica; exceptuando lo dispuesto por la ley en materia de servicios postales.
  - d) Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice aquellos servicios que ofrecen los organismos de apoyo al tránsito.

TÍTULO II  
AUTORIDADES SANCIONATORIAS  
COMPETENTES

Artículo 7°. *Superintendencia de Transporte*. La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de conocer en forma exclusiva los asuntos de radio de acción nacional, adelantar las acciones administrativas sancionatorias, y adoptar las medidas administrativas a que haya lugar con ocasión de la infracción a las normas que regulan el sector transporte y los derechos de los usuarios del sector transporte; respecto de:

- 7.1. Los prestadores de servicio público de transporte de los modos terrestre, aéreo, acuático, transporte por cable, férreo y demás sistemas de transporte que se reglamenten.
- 7.2. Las personas naturales o jurídicas que forman parte de la cadena logística de transporte en cada uno de sus modos.
- 7.3. Los fabricantes, importadores, ensambladores y comercializadores de equipos y vehículos destinados al servicio público de transporte.
- 7.4. Los propietarios de los equipos y vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte.
- 7.5. Las empresas de transporte público del radio de acción nacional.
- 7.6. Los propietarios, representantes legales, directivos y revisores fiscales de las empresas de servicio público de transporte.
- 7.7. Los conductores de los equipos y vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte.
- 7.8. Las empresas que prestan servicios conexos al transporte público.
- 7.9. Los sujetos que administran o ejecutan programas asociados a la prestación del servicio público de transporte, tales como los programas de seguridad vial. Se excluyen de vigilancia, inspección y control las entidades financieras que administran los fondos de reposición para atender los requerimientos económicos y financieros para la reposición y renovación del parque automotor de los vehículos de servicio de transporte público terrestre.
- 7.10. Los generadores de carga.
- 7.11. Los organismos de tránsito.
- 7.12. Los organismos de apoyo al tránsito.
- 7.13. Las empresas que administran u operan el sistema de control y vigilancia - SICOV, o el que haga sus veces.
- 7.14. Quienes promuevan o faciliten, a través de plataformas tecnológicas, la prestación

de servicios de transporte público no autorizados y/o habilitados.

- 7.15. Las sociedades portuarias.
- 7.16. Los operadores portuarios.
- 7.17. Los administradores, contratistas o concesionarios de infraestructura, servicios conexos y complementarios.
- 7.18. Las autoridades y entidades que integran el Sistema Nacional de Transporte, exceptuando al Ministerio de Transporte.
- 7.19. Las autoridades territoriales y/o administrativas de transporte y tránsito.
- 7.20. Aquellas personas naturales o jurídicas u otras formas asociativas que violen las normas, faciliten su infracción o realicen ilegalmente actividades relacionadas con la prestación del servicio público de transporte, los servicios conexos o complementarios y su infraestructura.

La función de que trata el presente artículo será ejercida sin perjuicio de las demás funciones que por ley o demás disposiciones normativas le hayan sido atribuidas a la Superintendencia de Transporte.

Parágrafo 1°. Para efectos del ejercicio de sus funciones, los sujetos activos del régimen sancionatorio también serán sujeto de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte, sin perjuicio de los sujetos previstos como tales en otras normas vigentes.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Transporte es competente en relación con los servicios derivados de los contratos de concesión, así como de los servicios conexos y complementarios destinados a la construcción, rehabilitación, operación, explotación, así como de la operación, construcción y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte terrestre, fluvial, marítima, y aeroportuaria.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil mantendrá las competencias que a la fecha tiene en materia de transporte aéreo, de conformidad con las normas vigentes en la materia. La función de protección de usuarios del servicio de transporte aéreo está a cargo de la Superintendencia de Transporte.

Artículo 8°. *Autoridad sancionatoria del nivel territorial*. Las autoridades de transporte competentes de cada jurisdicción o en quien estas deleguen serán las encargadas de adelantar las acciones administrativas sancionatorias a que haya lugar con ocasión de la infracción a las normas que regulan el sector transporte, respecto de:

- 8.1 Las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor colectivo, municipal, distrital o metropolitano.
- 8.2 Las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor individual.
- 8.3 Las empresas de servicio público de transporte mixto en el radio de acción municipal, distrital o metropolitano.

- 8.4 Las empresas operadoras de Sistemas Integrados de Transporte Masivo.
- 8.5 Las empresas operadoras del servicio de transporte o entes gestores de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de Transporte Público.
- 8.6 Empresas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram.
- 8.7 Entes gestores y operadores de recaudo de sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público, sistemas integrados de transporte público, transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram.
- 8.8 Los propietarios, poseedores o tenedores de los equipos destinados para la prestación del servicio público de transporte colectivo en el radio de acción municipal, distrital o metropolitano.
- 8.9 Los propietarios, poseedores o tenedores de los equipos destinados para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual.
- 8.10 Los propietarios, poseedores o tenedores de los equipos destinados para la prestación del servicio público de transporte mixto en el radio de acción municipal, distrital o metropolitano.

Artículo 9°. *Competencia preferente de la Superintendencia de Transporte.* En todo caso la Superintendencia de Transporte podrá de oficio iniciar o asumir la actuación administrativa iniciada por la autoridad sancionatoria del nivel territorial, previo a la expedición del acto administrativo que decide el asunto de fondo por parte de tal autoridad. En dicho caso, la autoridad sancionatoria del nivel territorial suspenderá la actuación y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Superintendencia de Transporte, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final.

### TÍTULO III

#### DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

Artículo 10. *Procedimiento aplicable.* Las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio se adelantarán de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o derogue; y en lo no previsto en este último, en las del Código General del Proceso.

Artículo 11. *Propósitos de las actuaciones administrativas.* La Superintendencia de Transporte o la autoridad de transporte territorial o en quien ellos se encomiende la función, en la jurisdicción de su competencia, velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente del sector transporte. Los anteriores propósitos se tendrán en cuenta al momento de resolver la necesidad de iniciar o no

una investigación, sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta.

Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, la Superintendencia de Transporte podrá instruir a sus vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de que trata la presente ley, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su aplicación.

Artículo 12. *Publicación de las actuaciones administrativas.* La Superintendencia de Transporte o la autoridad de transporte territorial o en quien ellos se encomiende la función, en la jurisdicción de su competencia, publicará en su página web, las aperturas de investigación por infracciones a las normas de transporte, y las decisiones sancionatorias; una vez en firme. Cuando haya lugar a ello, en las publicaciones se invitará a los terceros interesados a participar en las actuaciones, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Parágrafo. Se podrá ordenar la publicación de un aviso de los actos administrativos referidos en un diario de circulación regional o nacional, así como la publicación de otros actos administrativos diferentes a los enunciados, obrando la debida motivación para ello.

Artículo 13. *Medidas preventivas.* La Superintendencia de Transporte podrá adoptar medidas temporales o definitivas, a efectos de precaver o superar situaciones de grave alteración en la prestación del servicio público de transporte o actividades portuarias, vulneración de los derechos de los usuarios, y/o de cualquier otra circunstancia que atente contra la utilización de la infraestructura del país.

Las medidas preventivas podrán consistir, entre otras, en:

- 13.1. La orden de suspensión inmediata de conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones señaladas en las normas de transporte.
- 13.2. La suspensión de la habilitación de las empresas.
- 13.3. La orden de bloqueo temporal de acceso al medio de comercio electrónico que se utilice por cualquier de los sujetos señalados en el artículo 6° de esta ley, que viole o facilite la violación de normas de transporte, hasta por 180 días.
- 13.4. El cierre temporal del establecimiento de comercio que se utilice por cualquiera de los sujetos señalados en el artículo 6° de esta ley, que viole o facilite la violación de normas de transporte, hasta por 180 días.
- 13.5. La orden de suspender la actividad de la empresa, cuando ponga en riesgo la vida, salud o integridad de las personas.
- 13.6. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los usuarios por la violación de las normas del sector.

13.7. Ordenar, de conformidad con las disposiciones legales existentes, la inmovilización o retención de vehículos.

13.8. Suspensión de emisión del zarpe.

13.9. Ordenar la respectiva anotación en el sistema Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y/o en el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC) cuando se trate de vehículos con omisiones en su registro inicial.

13.10. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley y ordenar, si es del caso, las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o se cause o agrave el daño o perjuicio a los usuarios del sector transporte.

Los costos en que incurra la autoridad competente con ocasión de las medidas preventivas correrán por cuenta del sujeto obligado a dar cumplimiento a la medida.

Artículo 14. *Beneficios por colaboración.* La Superintendencia de Transporte podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de transporte público terrestre, marítimo, fluvial, portuario, concesiones e infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, así como de protección de usuarios, en caso de que informen a la Superintendencia acerca de la existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes de ser el caso, aun cuando ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo anterior, de conformidad con las siguientes reglas:

14.1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le sería impuesta. No podrán acceder a los beneficios el instigador o promotor de la conducta.

14.2. La Superintendencia de Transporte establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las conductas, entendiéndose por colaboración con las autoridades el suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal.

b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración.

Artículo 15. *Pruebas por medios electrónicos.* Las pruebas se decretarán y practicarán de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código General del Proceso, incluyendo aquellas solicitadas, decretadas y practicadas por medios electrónicos.

Parágrafo. El Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias para que la Superintendencia de Transporte cuente con las condiciones para generar, archivar y comunicar mensajes de datos para la práctica de pruebas por medios electrónicos.

Artículo 16. *Reserva.* En las actuaciones administrativas adelantadas por la Superintendencia de Transporte o la autoridad sancionatoria territorial o en quien ellos se encomiende la función, en la jurisdicción de su competencia, se aplicarán las siguientes reglas:

16.1. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación administrativa se organizarán en un solo expediente, en el cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado.

Los sujetos que entreguen información a la Superintendencia de Transporte deberán identificar cuáles documentos tienen carácter reservado, precisando la causal legal y solicitando a la autoridad que se mantenga en cuaderno reservado. Para ello, deberán presentar, junto con el documento contentivo de la información sobre la que solicitan la reserva, un resumen no confidencial del mismo. La Superintendencia deberá en estos casos incluir los resúmenes en el expediente público y abrir otro cuaderno, de carácter reservado, en el que se incluirán los documentos completos.

16.2. Los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tienen el carácter de reservados obrarán dentro del expediente en cuaderno separado.

16.3. Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva. La Autoridad conformará los cuadernos públicos y reservados para esos efectos.

También serán objeto de reserva las actas de los Comités Internos de la Superintendencia de Transporte.

16.4. La averiguación preliminar, hasta antes del acto administrativo de apertura de investigación, será reservada, en protección del buen nombre de las empresas en los mercados.

16.5. En caso de que la actuación inicie por denuncia y con el objeto de evitar retaliaciones en los mercados, el denunciante

podrá solicitar que se mantenga bajo reserva su identidad.

Artículo 17. *Notificaciones y comunicaciones.* Las resoluciones de apertura de investigación, la que pone fin a la actuación y la que decide los recursos contra actos administrativos definitivos, deberán notificarse personalmente. De no ser posible, se habrán de efectuar de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los demás actos administrativos que se expidan se comunicarán a la dirección que para estos propósitos suministre el investigado o apoderado y, en ausencia de ella, a la dirección física o de correo electrónico que aparezca en el registro mercantil del investigado.

Las notificaciones de que trata el presente artículo estarán sujetas a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 18. *Caducidad de la facultad sancionatoria.* La facultad para imponer una sanción por la violación de las normas del sector transporte o la violación de los derechos de los usuarios caducará transcurridos cinco (5) años contados desde la ejecución de la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado.

#### TÍTULO IV

### CONDUCTAS SANCIONABLES DEL RADIO DE ACCIÓN NACIONAL

#### CAPÍTULO I

##### **Infracciones generales**

Artículo 19. *Infracciones generales en el sector transporte.* Los sujetos señalados en los artículos 7° y 8° de esta ley serán responsables por:

- 19.1. No reportar la información o no acatar las solicitudes de información de la Superintendencia de Transporte o de la autoridad de transporte y tránsito competente, las órdenes e instrucciones que impartan, u obstruir las actuaciones administrativas.
- 19.2. Las demás conductas que constituyan violación a las demás leyes del sector transporte, y que no tengan asignada otra sanción específica.
- 19.3. Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio público de transporte.
- 19.4. No capacitar anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero en condición de discapacidad.
- 19.5. No contar con el personal capacitado para la atención de personas en condición de discapacidad.
- 19.6. No contar con equipos debidamente señalizados o acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condición de discapacidad.
- 19.7. Negar la prestación del servicio a personas en condición de discapacidad acompañadas de su animal de asistencia, siempre y cuando este último vaya provisto del distintivo especial indicativo que se establezca y la tipología del respectivo vehículo permita el transporte del animal en forma adecuada, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional.
- 19.8. No asumir una conducta diligente en caso de una emergencia o incidente, para contrarrestar las causas que la originaron, reducir los riesgos o restablecer la normalidad.
- 19.9. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención de las peticiones, quejas, denuncias, y reclamos presentados por los usuarios.
- 19.10. No respetar las normas o regulación económica o políticas tarifarias existentes determinados para la autoridad competente, para cada modalidad de transporte.

#### CAPÍTULO II

### **Infracciones relacionadas con la infraestructura de transporte**

Artículo 20. *Directivos, representantes legales y administradores de la infraestructura de transporte.* Los directivos, representantes legales y administradores de la infraestructura de transporte que por cuenta de sus funciones lleguen a adoptar decisiones que tengan como propósito o efecto la afectación de los principios de accesibilidad, seguridad y calidad del transporte y con ellas afecten de forma grave las condiciones de la infraestructura y de la prestación del servicio de transporte, sin criterios de razonabilidad, podrán ser investigados y sancionados en los términos de la presente ley.

Artículo 21. *Recuperación de fajas de retiro obligatorio.* Será obligación para los administradores de la infraestructura de transporte fomentar la recuperación de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, así como incentivar el mejoramiento del entorno. La omisión de esta obligación acarreará investigaciones y sanciones en los términos de esta ley.

Artículo 22. *Administradores de infraestructura.* Los administradores de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y complementarios serán responsables:

- 22.1. Cuando la infraestructura, sus componentes, así como los servicios conexos y complementarios, tengan condiciones que contraríen las condiciones de seguridad

que se predica de aquellas y/o faciliten la ocurrencia de siniestros.

22.2. Cuando sucedan situaciones que conlleven a la suspensión o alteración en la prestación del servicio público de transporte originadas por la propagación de focos de infección, por la carencia de controles preventivos de salubridad e higiene, o por no adoptar las medidas que se consideren razonables para mitigar su impacto.

22.3. Cuando se afecte la conectividad y los niveles de servicio de la infraestructura de transporte por la congestión y/o la suspensión y/o la alteración de la prestación del servicio público de transporte, ya sea por omisión o la indebida aplicación de normas nacionales o internacionales que al respecto resulten exigibles. En todo caso, se considera que los administradores de la infraestructura son responsables por la afectación de la conectividad y de los niveles de servicio únicamente cuando se demuestre la concurrencia de:

- a) La afectación negativa en el nivel de la prestación del servicio de la infraestructura de transporte.
- b) El impacto grave a quienes hagan uso de la infraestructura, y
- c) La no adopción de medidas por parte del administrador de la infraestructura de transporte que razonablemente debieron ser implementadas con el fin de mitigar o conjurar la situación crítica, más aun, cuando esta resultaba previsible.

22.4. Cuando la infraestructura del transporte puesta al servicio de quienes hagan uso de esta no tenga ni conserve condiciones de cobertura y accesibilidad, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

22.5. Los administradores de la infraestructura de transporte también podrán ser responsables por:

- a) Negarse sin justa causa a la prestación del servicio.
- b) No tener en buen estado los equipos para la prestación del servicio y aquellos destinados para el uso de la infraestructura.
- c) No dar cumplimiento a los planes de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, derivados de las actividades de supervisión adelantadas por la Superintendencia de Transporte.
- d) No implementar, en el menor tiempo posible, acciones que mejoren las condiciones de la infraestructura del transporte, cuando resulten necesarias para superar circunstancias concretas que puedan comprometer la calidad y/o la seguridad en la prestación del servicio público de transporte, una vez las mismas se

encuentren debidamente evidenciadas por autoridad competente.

- e) No adoptar o implementar los protocolos en caso de una emergencia o incidente para restablecer la normalidad.
- f) No administrar ni ejecutar los recursos en los términos previstos en el contrato de concesión o similares y/o darles una destinación distinta de lo previsto, cuando con ello se genere una grave afectación a la prestación del servicio público de transporte.
- g) No expedir ni entregar oportunamente el documento que acredita el pago de tarifas, peaje, tasa de uso, tiquete de báscula, y demás documentos que en desarrollo de sus funciones deba emitir.
- h) Realizar cobros sin la autorización legal y/o contractual a los usuarios del servicio público de transporte, de su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios.
- i) Permitir o prohibir la operación de la infraestructura de transporte, servicios conexos y complementarios, sin atender los criterios y condiciones determinadas por las normas de transporte o infraestructura.
- j) No contar, no mantener actualizado o no darle aplicación al reglamento técnico de operaciones o a los manuales operativos o cualquier otro instrumento que tenga como propósito la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte, en los términos legales y/o contractuales.
- k) No adoptar las medidas que le sean exigibles de acuerdo con la normatividad vigente para el funcionamiento del sistema de interoperabilidad de recaudo electrónico vehicular IP/REV.

Artículo 23. *Ámbito de aplicación del capítulo.* Quedarán exceptuadas del presente régimen sancionatorio respecto de las conductas de que trata el presente capítulo, la Nación, las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Transporte, cuando tengan a su cargo la infraestructura de transporte.

### CAPÍTULO III

#### **Infracciones a las normas de transporte terrestre**

Artículo 24. *Fabricantes, ensambladores y distribuidores de equipos.* Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de equipos y vehículos de transporte terrestre destinados al servicio público serán responsables por no cumplir con la reglamentación técnica para accesibilidad, de peso y dimensiones, o de condiciones de seguridad y comodidad de los vehículos, expedida por la autoridad competente.

Artículo 25. *Propietarios, tenedores o poseedores de equipos.* Los propietarios, tenedores

o poseedores de equipos destinados al servicio público de transporte en el radio de acción nacional, serán responsables por:

- 25.1 No mantener el vehículo en óptimas condiciones de operación y seguridad.
- 25.2 Tolerar la prestación del servicio público de transporte sin el cumplimiento de las obligaciones de tránsito y transporte que le asisten para ello.
- 25.3 Realizar directamente o indirectamente actividades comerciales que corresponden a la empresa de transporte, incluyendo conseguir clientes y contratos.
- 25.4 No acatar las instrucciones del representante legal de la empresa de transporte para la prestación del servicio público de transporte.
- 25.5 Promover, permitir, tolerar o realizar la alteración de las condiciones técnicas del equipo, de los dispositivos asociados a la prestación del servicio, o de la información de registro automotor.
- 25.6 Obstruir o no cumplir con el plan de rodamiento dispuesto por la empresa para la prestación del servicio público de transporte.
- 25.7 Abandonar o negarse, sin justa causa, la prestación del servicio público de transporte.
- 25.8 Permitir, promover, tolerar o realizar la prestación del servicio público de transporte con equipos que hayan cumplido su vida útil o su tiempo de uso, cuando haya lugar.

Artículo 26. *Conductores de equipos.* Los conductores de equipos destinados al servicio público de transporte de radio de acción nacional serán responsables por:

- 26.1 No informar al propietario, poseedor, tenedor del equipo o a la empresa de las fallas o desperfectos del equipo que afecten la prestación del servicio público de transporte.
- 26.2 Transportar mercancía que supere los límites de pesos y dimensiones establecidos por las disposiciones legales o reglamentarias, sin portar los respectivos permisos.
- 26.3 Transportar un número de pasajeros que excedan la capacidad establecida en la ficha técnica de homologación.
- 26.4 Prestar el servicio de transporte de carga sin portar los documentos de transporte.
- 26.5 Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo en sitios no establecidos por la empresa de servicio público de transporte.
- 26.6 No permitir la práctica aleatoria de la prueba de alcoholimetría y sustancias psicoactivas en la infraestructura de transporte.

Artículo 27. *Terminales de transporte terrestre.* Las terminales de transporte terrestre serán responsables por:

- 27.1 No capacitar anualmente al personal operativo dependiente directo de la terminal

que ejerce funciones relacionadas con la atención integral al pasajero.

- 27.2 No contar con el personal operativo dependiente del terminal transporte capacitado para la atención de personas en condición de discapacidad.
- 27.3 No cumplir con los reglamentos establecidos para los programas de medicina preventiva relacionados con efectuar exámenes médicos generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría y sustancias psicoactivas a una muestra representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados de la respectiva terminal.
- 27.4 Permitir el despacho de equipos que no hayan pagado la tasa de uso correspondiente.
- 27.5 Permitir el despacho de equipos de servicio especial que no estén autorizados o que no tengan suscritos contratos de transporte de alta temporada con las empresas de transporte de pasajeros por carretera.
- 27.6 Cobrar la tasa de uso a equipos que no acrediten los documentos de tránsito y los documentos de transporte exigidos por la normatividad.
- 27.7 Cobrar valores diferentes a los fijados por parte del Ministerio de Transporte por concepto de tasa de uso.
- 27.8 No depositar los dineros diaria e íntegramente en la cuenta que correspondan al programa de seguridad vial y que para tal efecto establezca el organismo administrador del referido programa.
- 27.9 Realizar actividades diferentes a las establecidas y definidas por el manual operativo para cada área.
- 27.10 Permitir el ascenso o descenso de los pasajeros a los equipos en sitios diferentes a las plataformas destinadas para tal fin en la infraestructura de transporte.

Artículo 28. *Administradores de programas de seguridad vial.* Los administradores de los programas de seguridad vial serán responsables por:

- 28.1 No contar con personal idóneo para la práctica de exámenes de fatiga, alcoholimetría u otros exámenes determinados por la normatividad aplicable.
- 28.2 No realizar los exámenes de fatiga, alcoholimetría u otros exámenes dispuestos por la normatividad aplicable en la materia.
- 28.3 No destinar el dinero recaudado para los programas de seguridad vial, en la ejecución de los exámenes y demás programas a que haya lugar según la normatividad aplicable.

Artículo 29. *Generadores de carga.* Los generadores de carga serán responsables por:

- 29.1 Contratar la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga

con personas jurídicas o naturales no habilitadas para la prestación del servicio en esta modalidad.

- 29.2 Contratar la prestación del servicio directamente con el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo, en los casos en que la reglamentación exige realizarlo con las empresas de transporte.
  - 29.3 Contratar la prestación del servicio con equipos con omisiones en su registro inicial.
  - 29.4 No cumplir con las normas de cargue, descargue, rotulado, etiquetado, embalajes, envase, seguridad y disposición final de la carga.
  - 29.5 No cumplir con las normas de cargue, descargue, rotulado, etiquetado, embalajes, envase, seguridad y disposición final de mercancías peligrosas, controladas o restringidas.
  - 29.6 Permitir, facilitar, estimular, propiciar, autorizar o exigir el transporte de mercancías con pesos o dimensiones superiores a las establecidas en las disposiciones legales o reglamentarias.
  - 29.7 No llevar registro o no dar certificación o información de los pesos o dimensiones de la carga transportada.
  - 29.8 No informar a la empresa de transporte la calidad o naturaleza de la carga.
  - 29.9 No informar a la empresa de transporte la calidad de mercancía peligrosa, controlada o restringida de la carga.
  - 29.10 Retardar, sin justa causa, el cargue o descargue de las mercancías objeto del transporte en el origen o el destino.
  - 29.11 No cancelar el flete dentro de los plazos previstos en la ley, o en el contrato de transporte o suministro de transporte, o en el contrato de operación logística.
  - 29.12 No cargar o descargar la mercancía dentro de los tiempos establecidos en las reglamentaciones de los nodos de transporte, afectando la cadena logística.
  - 29.13 Cobrar valores a las empresas, propietarios o conductores de los vehículos, no pactados dentro del valor del contrato de transporte.
  - 29.14 No disponer de la logística para la ubicación de los vehículos de transporte de carga, para cargue y descargue en los lugares de origen y destino.
- 30.1 Prestar el servicio público de transporte, sin cumplir o mantener los requisitos habilitantes exigidos por la normatividad vigente.
  - 30.2 Prestar el servicio público de transporte, con equipos que no cuenten con los documentos de tránsito y/o documentos de transporte exigidos por la normatividad vigente.
  - 30.3 Prestar el servicio público de transporte con equipos que superen la vida útil o tiempo de uso fijada en la normatividad vigente.
  - 30.4 No realizar el mantenimiento preventivo y correctivo exigido en la normatividad vigente sobre todos los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte; ni contar con los respectivos soportes, los cuales no podrán ser objeto de alteraciones o enmendaduras.
  - 30.5 No controlar la actividad y estado de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
  - 30.6 No contratar los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de acuerdo con los requerimientos legales.
  - 30.7 No vigilar ni constatar la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
  - 30.8 No efectuar, cuando sea el caso, la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
  - 30.9 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por la autoridad competente, cuando haya lugar.
  - 30.10 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico-ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.
  - 30.11 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes, de acuerdo con los requerimientos legales.
  - 30.12 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en equipos no homologados para esta modalidad de servicio, de acuerdo con la normatividad vigente.
  - 30.13 Permitir la prestación del servicio público de transporte en equipos que no cumplan con los equipamientos y características necesarios para las condiciones de accesibilidad, calidad y seguridad.

Artículo 30. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros.* Las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros serán responsables por:

- 30.14 No presentar a la Superintendencia de Transporte oportunamente el programa de seguimiento y control de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio, o su equivalente, o a la que corresponda según la ley.
- 30.15 No contar con los equipos mínimos de capacidad transportadora autorizada.
- 30.16 No expedir a los propietarios de los equipos vinculados la documentación en la cual se discriminen los rubros y montos cobrados y pagados por cada concepto derivado del contrato de vinculación.
- 30.17 No gestionar, obtener o suministrar oportunamente los documentos de transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo cuando este haya entregado a la empresa, dentro de los términos legales o reglamentarios, la documentación requerida para dicho trámite.
- 30.18 Cobrar a los propietarios de los equipos por concepto de pago de la prima de los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, un valor mayor al realmente facturado por la compañía de seguros, cuando a ello haya lugar.
- 30.19 Negarse, sin justa causa legal, a expedir paz y salvo, cuando haya lugar.
- 30.20 Retener, sin justa causa, los documentos de transporte.
- 30.21 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados a comprar acciones o participaciones de la empresa.
- 30.22 Cobrar por la expedición de los documentos de transporte.
- 30.23 Permitir la operación de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte, sin portar los distintivos de la empresa o los señalados por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes sobre la materia.
- 30.24 Negarse sin justa causa a prestar el servicio público de transporte.
- 30.25 Alterar la tarifa, cuando esta se encuentre regulada.
- 30.26 No acondicionar en todo vehículo de capacidad igual o superior a 20 pasajeros, dos (2) sillas dotadas de cinturón de seguridad, lo más cercanas a las puertas de acceso y señalizadas adecuadamente, para uso preferencial por parte de los pasajeros con discapacidad.
- 30.27 Permitir la prestación del servicio público de transporte llevando pasajeros de pie, cuando ello no estuviera autorizado.
- 30.28 Exigir sumas de dinero o constitución de garantías por la expedición de paz y salvo para la vinculación o desvinculación de los equipos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales.
- 30.29 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados o a los conductores, presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte.
- 30.30 No mantener actualizado el estado de habilitación en el registro mercantil.
- Artículo 31. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.* En adición a las infracciones previstas para las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera serán responsables por:
- 31.1 No tener implementado el fondo de reposición de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- 31.2 No depositar o trasladar los recursos correspondientes al fondo de reposición, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 31.3 Dar uso indebido y/o manejar irregularmente los dineros recaudados para el fondo de reposición, cuando de acuerdo con las normas sea obligatorio disponer de este.
- 31.4 No devolver el dinero del fondo de reposición a quien corresponda una vez se desvincule el equipo de la empresa.
- 31.5 Prestar el servicio público de transporte de pasajeros por carretera, en rutas, horarios o frecuencias diferentes de las que le fueron adjudicadas, de conformidad con la normativa aplicable.
- 31.6 Cambiar las condiciones bajo las cuales se concedió la autorización de nivel de servicio.
- 31.7 No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa.
- 31.8 Permitir la operación de los equipos sin tener los elementos de identificación de rutas, el color o distintivo especial señalado por las autoridades para diferenciar el nivel de servicio o las tarifas que deben cobrar dichos automotores.
- 31.9 No iniciar la prestación del servicio en el término señalado en el acto administrativo de adjudicación de la ruta.
- 31.10 Disminuir el servicio de cada ruta en más de un 30%, de acuerdo con los permisos de operación, por más de quince (15) días consecutivos.
- 31.11 Abandonar el servicio autorizado, de conformidad con la normativa aplicable.

31.12 No contar o mantener en sus archivos los estudios y estructuras de costos que den origen al cálculo de las tarifas.

31.13 Cobrar una tarifa inferior diferente a la establecida, cuando esta se encuentre regulada.

Artículo 32. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto de radio de acción nacional.* En adición a las infracciones previstas para las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros para el radio de acción nacional, las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto serán responsables por:

32.1 No tener implementado el fondo de reposición, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

32.2 No hacer el aporte correspondiente al fondo de reposición, cuando de acuerdo con la normativa aplicable.

32.3 Dar uso indebido y/o manejar irregularmente los dineros recaudados para el fondo de reposición, cuando de acuerdo con las normas sea obligatorio disponer de este.

32.4 No devolver el dinero del fondo de reposición a quien corresponda una vez se desvincule el equipo de la empresa.

32.5 Prestar el servicio público de transporte en rutas, horarios, frecuencias o zonas de operación diferentes de las que le fueron autorizadas.

32.6 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio público de transporte.

32.7 Permitir la prestación del servicio excediendo el número de pasajeros, de conformidad con lo establecido en la tarjeta de operación del vehículo.

32.8 No iniciar la prestación del servicio público de transporte en el término señalado en el acto administrativo correspondiente, en caso de que así se haya establecido por la autoridad competente.

32.9 Disminuir injustificadamente el servicio autorizado en más de un 30%, de acuerdo con los permisos de operación, por más de quince (15) días consecutivos.

32.10 Exigir sumas de dinero por la expedición de paz y salvo para la vinculación o desvinculación de los vehículos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales.

32.11 Negarse, sin justa causa legal, a expedir paz y salvo, de conformidad con la normatividad vigente.

32.12 Cobrar una tarifa diferente a la establecida, cuando esta se encuentre regulada.

32.13 No reportar a la autoridad de vigilancia, inspección y control de transporte competente, en los plazos determinados, la relación actualizada del equipo con el cual presta el servicio público de transporte.

32.14 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los vehículos vinculados o a los conductores, presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte. No obstante, las empresas de transporte podrán, de común acuerdo con el propietario, adquirir, con cargo al contrato de vinculación, seguros adicionales que tengan como finalidad asegurar la indemnización de las víctimas de siniestros.

32.15 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.

32.16 No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa, o no reportar el plan de rodamiento en los plazos establecidos o su modificación a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente.

32.17 Permitir la prestación del servicio público de transporte en vehículos sin Tarjeta de Operación, sin portarla en el vehículo o con esta vencida.

32.18 Permitir la prestación del servicio público de transporte excediendo la capacidad transportadora autorizada.

32.19 Dejar y recoger pasajeros en sitios diferentes a los autorizados por la autoridad competente.

32.20 Pactar con los conductores esquemas con mecanismos de remuneración que incentiven la competencia con otros conductores en la vía.

32.21 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.

Artículo 33. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte especial.* En adición a las infracciones previstas para las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte especial serán responsables por:

33.1 No tener implementado el programa de reposición de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

33.2 No hacer el depósito o transferencia correspondiente al programa de reposición, cuando de acuerdo con el reglamento corresponda.

- 33.3 Dar uso indebido y/o manejar irregularmente los dineros recaudados para el programa de reposición, cuando de acuerdo con las normas sea obligatorio disponer de este.
- 33.4 Recoger o dejar pasajeros en lugares diferentes de los sitios acordados por las partes.
- 33.5 No reportar a la autoridad de vigilancia, inspección y control de transporte competente, en los plazos determinados, la relación actualizada del equipo con el cual presta el servicio público de transporte.
- 33.6 No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa, o no reportar el plan de rodamiento en los plazos determinados o su modificación a la autoridad de vigilancia, inspección, y control de transporte competente.
- 33.7 Negarse, sin justa causa, a expedir oportunamente el extracto de contrato.
- 33.8 Cobrar por la expedición del extracto de contrato.
- 33.9 No contar con cinturones de seguridad en todas las sillas.
- 33.10 Prestar el servicio de transporte escolar, sin acompañante mayor de edad con capacitación mínima en primeros auxilios.
- 33.11 No contar con el sistema de comunicaciones bidireccional exigido para la operación del servicio, o tenerlo en mal estado de funcionamiento.
- 33.12 Permitir la prestación del servicio sin llevar el Extracto del Contrato, debida y totalmente diligenciado por la empresa, o llevarlo con tachaduras o enmendaduras.
- 33.13 Expedir un extracto de contrato sin tener un contrato que lo soporte.
- 33.14 No haber suscrito los contratos que sustenten la capacidad transportadora.
- 33.15 Celebrar convenios de colaboración, o permitir la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, con empresas o personas no habilitadas en esta modalidad.
- 33.16 Contratar o permitir la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial con empresas no habilitadas en esta modalidad.
- 33.17 No reportar a la Superintendencia de Transporte y al sistema de información que para el efecto establezca el Ministerio de Transporte o quien haga sus veces, los convenios de colaboración empresarial y contratos con empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en periodos de alta demanda.
- 33.18 Suscribir convenios de colaboración empresarial utilizando una flota superior al treinta por ciento (30%) de su parque automotor vinculado y con tarjeta de operación vigente.
- Artículo 34. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte de carga.* Las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte de carga serán responsables por:
- 34.1 Prestar el servicio público de transporte, sin cumplir o mantener los requisitos de habilitación exigidos por la normatividad vigente.
- 34.2 Prestar el servicio público de transporte, con equipos que no tengan los documentos de tránsito y/o documentos de transporte exigidos por la normatividad vigente.
- 34.3 No realizar el mantenimiento preventivo y correctivo exigido en la normatividad vigente sobre todos los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte; ni contar con los respectivos soportes, los cuales no podrán ser objeto de alteraciones o enmendaduras.
- 34.4 No controlar la actividad y estado de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 34.5 No contratar los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de acuerdo con los requerimientos legales, cuando haya lugar a ello.
- 34.6 No vigilar ni constatar la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 34.7 No efectuar, cuando sea el caso, la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 34.8 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por la autoridad competente, cuando haya lugar a ello y de conformidad con la normatividad vigente.
- 34.9 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico-ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, cuando haya lugar a ello y de conformidad con las normas vigentes.
- 34.10 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en equipos no homologados para esta modalidad de servicio, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 34.11 No presentar oportunamente el programa de seguimiento y control de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio, o su equivalente, a la Superintendencia de

- Transporte, o a la que corresponda según la ley.
- 34.12 No expedir a los propietarios de los equipos vinculados la documentación en la cual se discriminen los rubros y montos cobrados y pagados por cada concepto derivado del contrato de vinculación, cuando haya lugar a ello.
- 34.13 No gestionar, obtener o suministrar oportunamente los documentos de transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo cuando este haya entregado a la empresa, dentro de los términos legales o reglamentarios, la documentación requerida para dicho trámite.
- 34.14 No registrar los documentos de transporte en el sistema que disponga el Ministerio de Transporte o quien haga sus veces.
- 34.15 Cobrar a los propietarios de los equipos de mayor valor por concepto de pago de la prima de los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, al realmente facturado por la compañía de seguros, cuando a ello haya lugar.
- 34.16 Negarse, sin justa causa legal, a expedir paz y salvo, cuando haya lugar.
- 34.17 Retener, sin justa causa, los documentos de transporte.
- 34.18 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados a comprar acciones o participaciones de la empresa.
- 34.19 Cobrar por la expedición de los documentos de transporte.
- 34.20 Realizar, permitir o tolerar la operación de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte, sin portar los distintivos señalados por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes sobre la materia, cuando haya lugar a ello.
- 34.21 Negarse sin justa causa a prestar el servicio público de transporte.
- 34.22 Alterar la tarifa, cuando esta se encuentre regulada.
- 34.23 Exigir sumas de dinero o constitución de garantías por la expedición de paz y salvo para la vinculación o desvinculación de los equipos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales.
- 34.24 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados o a los conductores, presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte.
- 34.25 No mantener actualizado el estado de habilitación en el registro mercantil.
- 34.26 Retener, por controversias contractuales o sin justa causa legal, los documentos que respaldan la operación de los vehículos.
- 34.27 Vincular vehículos para carga que no sean de servicio público.
- 34.28 Exigir u obligar a los propietarios de los vehículos vinculados a comprar acciones de la misma.
- 34.29 Negarse, sin justa causa legal, a expedir paz y salvo por cualquier concepto.
- 34.30 Exigir sumas de dinero por la expedición de paz y salvo por cualquier concepto.
- 34.31 Retener, por controversias contractuales o sin justa causa legal, los equipos propios de la operación.
- 34.32 Exigir documentos adicionales a los establecidos en la ley, para el trámite de los documentos que respaldan la operación.
- 34.33 Permitir o realizar la operación de equipos con mercancías que excedan los pesos o dimensiones permitidas, sin portar el permiso correspondiente.
- 34.34 Expedir el manifiesto de carga sin asegurarse que en el equipo se porten los distintivos, señales o elementos de seguridad que exigen los reglamentos para el transporte de cargas especiales, peligrosas o restringidas.
- 34.35 Expedir el manifiesto de carga a los equipos de servicio público de transporte terrestre que presenten omisión en su registro inicial.
- 34.36 Omitir o retardar la información referente a las relaciones económicas derivadas de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga cuando sea requerido por el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Transporte.
- 34.37 No diseñar ni ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en el manejo de mercancías peligrosas, restringidas y/o controladas.
- 34.38 No cumplir con las disposiciones exigidas para el manejo de la carga, en los términos definidos en la normatividad correspondiente.
- 34.39 No suministrar el personal encargado del manejo de mercancías peligrosas, restringidas y/o controladas, los insumos necesarios para garantizar su seguridad y protección.
- 34.40 No cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el transporte de mercancías peligrosas, restringidas y/o controladas, siempre y cuando el generador de carga hubiese manifestado esta calidad de las mercancías.
- 34.41 No verificar que los conductores cuenten con los documentos necesarios para el

transporte de mercancías peligrosas, restringidas y/o controladas, según la normatividad correspondiente.

- 34.42 Prestar el servicio público sin estar habilitada para esta modalidad.
- 34.43 Propiciar o permitir actos que de manera injustificada favorezcan o desfavorezcan a una persona o personas en la autorización de la prestación del servicio público de transporte de carga por parte de los funcionarios de la empresa o propietarios, conductores y/o tenedores de los vehículos de carga.
- 34.44 Aplicar descuentos prohibidos por la ley o normatividad correspondiente a los propietarios, conductores y/o tenedores de los vehículos de carga.
- 34.45 Efectuar pagos por debajo de costos eficientes de la operación de los propietarios, conductores y/o tenedores de los vehículos de carga.
- 34.46 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados o a los conductores, presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte.

Artículo 35. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte por cable.* Las empresas de transporte de modalidad por cable serán responsables por:

- 35.1 Prestar el servicio público de transporte, sin cumplir o mantener los requisitos de habilitación exigidos por la normatividad vigente.
- 35.2 Prestar el servicio público de transporte, con equipos que no tengan los documentos de tránsito y/o documentos de transporte exigidos por la normatividad vigente.
- 35.3 No realizar el mantenimiento preventivo y correctivo exigido en la normatividad vigente sobre todos los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte; ni contar con los respectivos soportes, los cuales no podrán ser objeto de alteraciones o enmendaduras.
- 35.4 No controlar la actividad y estado de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 35.5 No contratar los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de acuerdo con los requerimientos legales.
- 35.6 No vigilar ni constatar la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 35.7 No efectuar, cuando sea el caso, la afiliación al Sistema de Seguridad Social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 35.8 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por la autoridad competente, cuando haya lugar.
- 35.9 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico-ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.
- 35.10 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes, de acuerdo con los requerimientos legales.
- 35.11 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en equipos no homologados para esta modalidad de servicio, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 35.12 Permitir la prestación del servicio público de transporte en equipos que no cumplan con los equipamientos y características necesarios para las condiciones de accesibilidad, calidad y seguridad.
- 35.13 No presentar oportunamente el programa de seguimiento y control de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio, o su equivalente, a la Superintendencia de Transporte, o a la que corresponda según la ley.
- 35.14 No contar con los mínimos de capacidad transportadora autorizada.
- 35.15 Permitir la operación de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte, sin portar los distintivos de la empresa o los señalados por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes sobre la materia.
- 35.16 Negarse sin justa causa a prestar el servicio público de transporte.
- 35.17 Alterar la tarifa, cuando esta se encuentre regulada.
- 35.18 Permitir la prestación del servicio público de transporte llevando pasajeros de pie, cuando ello no estuviera autorizado.
- 35.19 No mantener actualizado el estado de habilitación en el registro mercantil.
- 35.20 Permitir la prestación del servicio en equipos tripulados por personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.
- 35.21 No contar con las certificaciones que se exijan bajo el Subsistema Nacional de Calidad o la normatividad aplicable.
- 35.22 No tener vigentes las pólizas de seguros exigidas en la normatividad vigente para la

prestación del servicio público de transporte por cable.

35.23 No contar con el Manual de Operación y Manual de Seguridad para la prestación del servicio público de transporte por cable, de acuerdo con la normatividad vigente.

35.24 No mantener las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso de operación.

Artículo 36. *Autoridades de tránsito.* Los gobernadores y los alcaldes en su calidad de autoridades de tránsito, y los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, serán responsables por:

36.1 No contar con un cuerpo de agentes que realice controles operativos en vía.

36.2 No impartir instrucciones para que se realicen controles operativos en la vía.

36.3 No cumplir los requisitos de autorización, así como los criterios técnicos o tecnológicos para la instalación u operación de los Sistemas Automáticos y Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, definidos por la autoridad competente.

Artículo 37. *Organismos de tránsito.* Los organismos de tránsito serán responsables por:

37.1 Cuando su actividad u omisión haya puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes.

37.2 Alterar o modificar la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o poner en riesgo la información de este.

37.3 Expedir certificados, autorizaciones o permisos en categorías o servicios no autorizados.

37.4 Reportar información desde sitios o instalaciones no autorizados.

37.5 No reportar o presentar la información requerida por el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Transporte.

37.6 Hacer caso omiso a las instrucciones impartidas por otra autoridad competente, para el cumplimiento de sus funciones.

37.7 Alterar los resultados obtenidos por los aspirantes para los diferentes trámites que surtan las personas ante estos.

37.8 Omitir, retardar o denegar en forma injustificada a los usuarios la prestación de los servicios a los que están obligados por ley.

37.9 Expedir documentos de tránsito sin el lleno de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

37.10 Utilizar y expedir documentos de tránsito con rangos o series no asignadas por el Ministerio de Transporte.

37.11 Delegar o contratar la fabricación, adquisición, suministro, impresión, personalización y distribución de documentos de tránsito con personas no autorizadas por el Ministerio de Transporte.

37.12 Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otra autoridad.

37.13 Realizar trámites de transporte y/o tránsito sin cumplir con los requisitos previstos en las normas, siempre que tengan asignada la función de realización de tales trámites.

37.14 No instalar ni mantener las señales de tránsito dentro de su jurisdicción.

37.15 No hacer uso del código de acceso a la base de datos y de la información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de conformidad con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin; así como de los registros físicos, documentos y archivos que se encuentran bajo su custodia.

37.16 Alimentar registros que son de su competencia sin agotar previamente la verificación de la información.

37.17 Variar las tarifas sin informarlo pública y previamente en sus instalaciones y a la autoridad competente.

37.18 No tomar las acciones pertinentes para evitar en su jurisdicción la prestación de servicios no autorizados.

37.19 No cumplir los criterios técnicos o tecnológicos para la instalación u operación de los Sistemas Automáticos y Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, definidos por la autoridad competente.

37.20 Delegar en terceros el ejercicio de sus funciones propias, a excepción de aquellas permitidas por ley.

37.21 Utilizar medios que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas para reserva y conservación de la información recaudada, de conformidad con la normativa aplicable.

37.22 No contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad determinada por la autoridad competente, para el desarrollo de su actividad.

Artículo 38. *Organismos de apoyo al tránsito.* Se consideran faltas de los organismos de apoyo al tránsito, las siguientes:

38.1 No informar al Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes las modificaciones que se presenten respecto de la información que haya sido aportada para obtener su habilitación o registro.

38.2 Prestar el servicio con información desactualizada o inexacta.

38.3 No almacenar, ni registrar, ni custodiar o alterar la información relativa a los procesos

- de certificación aprobados o rechazados, por cada usuario o vehículo atendido, y los demás informes de las evaluaciones efectuadas, de acuerdo con los parámetros que para el efecto establezca la normativa que los rige.
- 38.4 No reportar la información en la oportunidad y condiciones establecidas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- 38.5 Expedir certificados sin haber realizado la evaluación de la información, de acuerdo con los parámetros establecidos para tal fin.
- 38.6 Expedir certificaciones sin atender los procedimientos establecidos o sin utilizar los formatos adoptados para el efecto.
- 38.7 Certificar la idoneidad de una persona o de un vehículo, que haya reprobado las pruebas practicadas o no hayan realizado las pruebas obligatorias.
- 38.8 No utilizar los equipos dispuestos por la norma que los regula, para el cumplimiento de los procedimientos necesarios para la expedición de los certificados respectivos.
- 38.9 Vincular personal que no reúna los requisitos de formación académica y de experiencia exigidos o que presente documentos que no sean verídicos.
- 38.10 Reemplazar el personal sin dar aviso al Ministerio de Transporte, cuando la norma así lo exija, o mantener la vinculación a la entidad, durante la vigencia de sanciones de suspensión administrativa, judicial o profesional.
- 38.11 Operar sin los certificados de calidad o de conformidad, atendiendo las condiciones del Subsistema Nacional de Calidad o conformidad que determine el Ministerio de Transporte o la autoridad competente.
- 38.12 No obtener las certificaciones de calidad o de conformidad con la periodicidad que se exija en el Subsistema Nacional de Calidad.
- 38.13 Abstenerse o incumplir el deber de reportar por escrito a las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten entre la información documental del vehículo y la confrontación física del mismo, para el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor.
- 38.14 Recibir pago en efectivo por los servicios prestados o no recibir los pagos por los servicios prestados a través de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Transporte.
- 38.15 No cumplir o mantener la totalidad de condiciones de la habilitación.
- 38.16 Haber puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes en desarrollo de su actividad.
- 38.17 Alterar o modificar la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o poner en riesgo la información de este registro.
- 38.18 Expedir certificados en categorías o servicios no autorizados.
- 38.19 Facilitar a terceros los documentos, equipos o implementos destinados al servicio o permitir el uso a aquellos de su razón social por terceros.
- 38.20 Expedir certificados o dar constancias de exámenes, sin comparecencia del usuario.
- 38.21 Reportar información desde sitios o instalaciones no autorizados.
- 38.22 Mantenerse en servicio a pesar de encontrarse en firme sanción de suspensión de la habilitación.
- 38.23 Omitir el reporte por escrito a las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten en la información aportada por el usuario, o en la recibida durante la prestación del servicio.
- 38.24 Expedir certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes con equipos que no se encuentran certificados y/o autorizados expresamente por la Autoridad Ambiental competente.
- 38.25 Alterar o modificar la integridad de los resultados cualitativos y/o cuantitativos obtenidos de las pruebas de emisiones contaminantes de acuerdo a las metodologías establecidas por el Gobierno nacional para tales fines.
- 38.26 Dar destinación diferente al establecimiento de comercio a aquella autorizada por el Ministerio de Transporte o autoridad competente.
- 38.27 Utilizar medios que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas para reserva y conservación de la información recaudada, de conformidad con la normativa aplicable.
- 38.28 No contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad determinada por la autoridad competente, para el desarrollo de su actividad.
- Artículo 39. *Empresas administradoras de Sistemas de Control y Vigilancia.* Las empresas que operan y administran el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), o el que haga sus veces, serán responsables por:
- 39.1 Reportar información no veraz a la Superintendencia de Transporte.
- 39.2 No conservar los requisitos de homologación.
- 39.3 Permitir el cargue manual de operaciones en la plataforma.
- 39.4 No realizar la distribución de recursos a quienes ordena la ley.

39.5 No realizar la verificación de las transacciones con el sistema de control biométrico.

39.6 Realizar reportes duplicados de infracciones a la Superintendencia de Transporte.

39.7 Utilizar medios que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas para reserva y conservación de la información recaudada, de conformidad con la normatividad aplicable.

39.8 No contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad determinada por la autoridad competente, para el desarrollo de su actividad.

Artículo 40. *Desintegradoras*. Las empresas habilitadas para la desintegración de vehículos serán responsables por:

40.1 No cumplir o mantener los requisitos de habilitación o autorización exigidos por la normatividad vigente.

40.2 No cumplir con las especificaciones contenidas en el Subsistema Nacional de Calidad, de conformidad con lo previsto en la reglamentación.

40.3 No comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes los cambios que se presenten en las condiciones que dieron origen a la habilitación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.

40.4 Utilizar medios que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas para reserva y conservación de la información de todos los certificados de desintegración que expida, así como de los demás documentos requeridos para efectuar la desintegración vehicular.

40.5 No contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad determinada por el Ministerio de Transporte o la autoridad competente, para el desarrollo de la actividad de desintegración vehicular y la expedición del certificado de desintegración o documento equivalente.

40.6 No contar o no mantener vigente los permisos y demás documentos para efectuar la actividad de desintegración vehicular exigidas por las autoridades competentes. En este último caso, la Superintendencia de Transporte compulsará copias a estas para lo de su competencia.

40.7 Hacer un uso inadecuado del permiso para el registro y cargue de información en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cada una de las sedes que hayan sido habilitadas con estos propósitos o en sedes no habilitadas para tal efecto.

40.8 No reportar ante las autoridades competentes las inconsistencias que presente la información documental del vehículo.

40.9 No registrar en el sistema de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los certificados de desintegración física total de los vehículos, una vez se haya culminado la desintegración, de conformidad con lo previsto en la reglamentación correspondiente.

40.10 Expedir el certificado de desintegración física total de un vehículo, sin que este sea inhabilitado total y definitivamente en las condiciones establecidas en la norma aplicable.

40.11 No dejar constancia expresa y fílmica de la destrucción del vehículo y del proceso a través del cual fue desintegrado total y definitivamente.

Artículo 41. *Actividades de desintegración no autorizadas*. Serán responsables por ofrecer o ejercer las actividades de desintegración las personas que no estén autorizadas o habilitadas para ello.

Artículo 42. *Prestación del servicio público de transporte sin requisitos*. Las personas que sean propietarias, tenedoras, poseedoras, y/o conductores de equipos, o quienes administren plataformas o medios para la prestación de servicios de transporte serán responsables por ofrecer, promover, patrocinar o prestar el servicio público de transporte en vehículos de servicio particular, o equipos no autorizados, o con empresas que no estén habilitadas para la prestación del servicio público.

Artículo 43. *Tricimóviles*. Las autoridades de transporte serán responsables por no suministrar al Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Transporte, el estudio o el análisis que sustenta la decisión de implementar el servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido, para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad aplicable, entre otras, la determinación de la demanda insatisfecha, los incrementos o variaciones de capacidad o las de reorganización del servicio según corresponda.

Artículo 44. *Empresas de transporte férreo*. Las empresas de servicio público de transporte férreo serán responsables por:

44.1 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.

44.2 No contar con una ficha técnica de mantenimiento por cada uno de los equipos, que contenga, entre otros requisitos, la identificación del mismo, la fecha de revisión, las reparaciones efectuadas, los reportes, el control y el seguimiento. La ficha no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras.

44.3 No capacitar anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero en condiciones de discapacidad.

- 44.4 No contar con el personal capacitado para la atención de personas en condiciones de discapacidad.
- 44.5 No contar con equipos debidamente señalizados o acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condiciones de discapacidad.
- 44.6 Permitir que las estaciones y anexidades no cuenten con un adecuado programa arquitectónico que incluya servicios complementarios, salas de espera, servicios sanitarios, facilidades para personas en condiciones de discapacidad, maleteros, servicios de comunicaciones para el público, oficinas de administración y señalización.
- 44.7 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por el reglamento respectivo.
- 44.8 No contratar a los tripulantes de los equipos con los cuales se presta el servicio público.
- 44.9 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.
- 44.10 Apostar anuncios publicitarios en la vía, de tal manera que obstruyan las señales o que pongan en riesgo la operación.
- 44.11 No someter a exámenes médicos, teóricos, técnicos y prácticos en la especialidad correspondiente al personal operador o auxiliar del equipo.
- 44.12 No corresponder el diseño de los equipos con el uso propuesto.
- 44.13 No contar los equipos con las especificaciones técnico-mecánicas que exigen las normas internacionales y del fabricante. Las especificaciones técnicas de la vía y de los equipos deben corresponderse mutuamente.
- 44.14 Operar o permitir la operación de sus equipos por tripulantes que no se hayan realizado anualmente un examen médico para determinar la capacidad física, mental y de coordinación motriz, a través de entidades certificadoras de personas.
- 44.15 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en vehículos no homologados para esta modalidad de servicio por el Ministerio de Transporte o por quien haga sus veces.
- 44.16 Permitir la operación de los equipos por personas no idóneas, sin el permiso o licencia requerida, o con esta vencida, suspendida o cancelada.
- 44.17 Permitir la prestación del servicio en equipos tripulados por personas que hayan consumido alcohol o que estén bajo efectos de sustancias psicoactivas.
- 44.18 No cumplir con las normas internacionales en materia de manipulación, transporte y almacenamiento de mercancías.
- 44.19 Negarse sin justa causa a la prestación del servicio.
- 44.20 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 44.21 Realizar cobros sin la autorización legal y/o contractual a los usuarios del servicio público de transporte, de su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios.
- 44.22 No dar cumplimiento a los planes de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, siempre y cuando dentro del objeto del contrato se encuentra incluida esta actividad, derivados de las actividades de supervisión adelantadas por la Superintendencia de Transporte.
- 44.23 No implementar, en el menor tiempo posible, acciones que mejoren las condiciones de la infraestructura del transporte, cuando resulten necesarias para superar circunstancias concretas que puedan comprometer la calidad y/o la seguridad en la prestación del servicio público de transporte, una vez las mismas se encuentren debidamente evidenciadas por autoridad competente, y las mismas se encuentren contenidas dentro del objeto contractual.
- 44.24 No adoptar o implementar los protocolos en caso de una emergencia o incidente para restablecer la normalidad.
- 44.25 No expedir ni entregar oportunamente el documento que acredita el pago de tarifas, y demás documentos que en desarrollo de sus funciones deba emitir.
- Artículo 45. *Entes gestores de Sistemas de Transporte Férreo.* Los entes gestores de Sistemas de Transporte Férreo, serán responsables por:
- 45.1 No adoptar ni ejecutar las medidas y mecanismos necesarios para realizar la adecuada planeación, construcción e implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público, Integrados de Transporte Público e integrados de transporte regional.
- 45.2 No permitir ni suministrar información necesaria para el seguimiento a los convenios de cofinanciación por parte de los Ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con sus competencias.
- 45.3 No ejecutar el manejo financiero del proyecto de acuerdo con los principios y normas de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

45.4 No adoptar las decisiones que correspondan frente a los incumplimientos de los operadores del servicio, así como de los operadores de recaudo.

45.5 No adoptar las medidas conducentes a lograr la accesibilidad y cobertura del servicio.

Artículo 46. *Operadores de recaudo de Sistemas de Transporte Férreo*. Los operadores de recaudo de Sistemas de Transporte Férreo, serán responsables por:

46.1 No prestar el servicio de recaudo en las condiciones de atención y cobertura requeridas para la adecuada prestación del servicio de transporte.

46.2 No contar con información veraz y oportuna respecto de las transacciones realizadas dentro del sistema.

46.3 No contar con los equipos (software, hardware, mecanismos de control centralizados e integrados) requeridos para la prestación del servicio, en condiciones adecuadas de funcionamiento teniendo en cuenta las condiciones propias del sistema de recaudo de la operación donde se preste el mismo.

46.4 No expedir ni entregar oportunamente el documento que acredita el pago de tarifas, y demás documentos que en desarrollo de sus funciones deba emitir.

#### CAPÍTULO IV

##### **Conductas sancionables en el modo transporte acuático**

Artículo 47. *Empresas de transporte fluvial*. Las empresas de transporte fluvial serán responsables por:

47.1 No informar a la Superintendencia de Transporte cambio de sede o domicilio.

47.2 No presentar el sobordo de carga ante la autoridad competente.

47.3 No reportar oportuna y fielmente la información de pasajeros y toneladas movilizadas ante la autoridad fluvial competente.

47.4 No portar los documentos que, de acuerdo con los reglamentos, amparen la operación de transporte o que los mismos no estén vigentes.

47.5 No portar los documentos expedidos y exigidos por la autoridad competente.

47.6 Cobrar tarifas de cualquier tipo por fuera de los valores fijados por la normativa aplicable, si hay lugar a ello.

47.7 No vigilar o constatar que los tripulantes de las embarcaciones que forman parte del parque fluvial de la empresa estén afiliados al sistema de seguridad social.

47.8 No contratar a los tripulantes de los equipos con los cuales se presta el servicio público.

47.9 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.

47.10 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las valuaciones médico-ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.

47.11 No capacitar anualmente al personal para la atención de personas en condición de discapacidad.

47.12 No contar con embarcaciones debidamente señalizadas, acondicionadas o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condición de discapacidad.

47.13 No cumplir o no mantener las condiciones técnicas de la embarcación y de servicio establecidas en las respectivas patentes de navegación.

47.14 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos en la normatividad respectiva.

47.15 No contar con los documentos de tránsito necesarios para la prestación de servicio público de transporte.

47.16 Causar daño de manera deliberada a la infraestructura de tal manera que afecte la prestación del servicio público de transporte.

47.17 No tomar las medidas preventivas necesarias para la estiba y sujeción de la carga, cuando sea el caso.

47.18 Enrolar o embarcar tripulantes que no cuenten con las licencias expedidas por las autoridades competentes.

47.19 Embarcar materiales tóxicos en la misma bodega de carga donde se transporten víveres a granel o materias primas para elaborar alimentos.

47.20 Que las embarcaciones no cumplan con la normatividad vigente para el transporte de carga líquida a granel.

47.21 No portar los equipos necesarios para garantizar la seguridad de la carga, embarcación y pasajeros.

47.22 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio público de transporte en embarcaciones que no cuenten con los permisos y autorizaciones respectivos de acuerdo con la normativa aplicable.

- 47.23 Permitir, tolerar o autorizar el acceso a las embarcaciones vinculadas a ellas por tripulantes que se encuentren bajo los efectos de alcohol u otra sustancia psicoactiva.
- 47.24 Transportar pasajeros o carga en embarcaciones no autorizadas para dicho servicio.
- 47.25 Llevar sobrecupo de pasajeros, bienes o carga de acuerdo a la capacidad establecida en la Patente de Navegación.
- 47.26 Abastecer de combustible las embarcaciones con pasajeros a bordo.
- 47.27 Negarse, sin causa justificada, a la prestación del servicio de transporte.
- 47.28 Transportar, usar, comercializar, inducir a otro u otros al uso o comercio de estupefacientes.
- 47.29 Dejar perder o saquear la mercancía por negligencia o descuido.
- 47.30 No transportar a enfermos o heridos, ni prestar asistencia cuando las circunstancias así lo exijan.
- 47.31 Embarcar o desembarcar personas, animales o carga en muelles o cualquier sitio no autorizado generando riesgos de seguridad en el transporte.
- 47.32 No atender las instrucciones de la autoridad competente respecto de horas, rutas, señales, y condiciones técnicas de las embarcaciones, para la prestación del servicio de transporte.
- 47.33 No contar con el permiso de zarpe cuando el convoy atraque en un puerto intermedio de su itinerario, con el propósito de recoger botes cargados u otros botes que se tomen en dicho puerto.

Artículo 48. *Empresas de transporte marítimo.*

Las empresas de transporte marítimo serán responsables por:

- 48.1 No reportar a la Superintendencia de Transporte cualquier cambio de sede o domicilio.
- 48.2 No vigilar o constatar que los tripulantes de los equipos vinculados estén afiliados al sistema de seguridad social.
- 48.3 No garantizar el cumplimiento a los pagos de salarios, prestaciones y seguridad social a los tripulantes de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte marítimo.
- 48.4 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.
- 48.5 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico-ocupacionales o no

realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.

- 48.6 No capacitar anualmente al personal para la atención de personas en condición de discapacidad.
- 48.7 No contar con equipos debidamente señalizados, acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condición de discapacidad.
- 48.8 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos en la normatividad respectiva.
- 48.9 Causar daño a la infraestructura portuaria, de tal manera que afecte la prestación del servicio público de transporte.
- 48.10 No tomar las medidas preventivas necesarias para estibar la carga de acuerdo con la normativa existente.
- 48.11 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio público de transporte en naves que no cuenten con los permisos y autorizaciones respectivos de acuerdo con la normativa aplicable.
- 48.12 Abastecerse de combustible con pasajeros a bordo, estando o atracando en la infraestructura portuaria.
- 48.13 Negarse, sin causa justificada, a la prestación del servicio.
- 48.14 No cumplir las obligaciones contenidas en convenios, y tratados internacionales ratificados por Colombia, y que se encuentren relacionadas con las funciones de la Superintendencia de Transporte.

Artículo 49. *Sociedades portuarias.* Las sociedades portuarias serán responsables por:

- 49.1 Fijar las tarifas o modificar aquellas que estén reguladas, sin tener en cuenta los parámetros fijados por la normativa aplicable.
- 49.2 Cobrar tarifas por fuera de los valores fijados por la normativa aplicable, si hay lugar a ello.
- 49.3 Cobrar tarifas sin cumplir los requisitos establecidos en la ley.
- 49.4 Fijar la tarifa o modificarla sin dar aviso previo a la Superintendencia de Transporte, en los términos establecidos por la ley aplicable.
- 49.5 Aplicar tarifas de manera discriminatoria, en contravía de los intereses de las empresas que desarrollan actividades portuarias, sin perjuicio de la competencia asignada por ley a la Superintendencia de Industria y Comercio.

- 49.6 Cobrar tarifas que no cubran los costos de operación de la sociedad portuaria, sin perjuicio de la competencia asignada por ley a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 49.7 No capacitar anualmente al personal para la atención de personas en condición de discapacidad.
- 49.8 No realizar la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el desplazamiento de personas en condición de discapacidad.
- 49.9 Realizar actividades portuarias sin tener aprobado el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación por las autoridades competentes.
- 49.10 Realizar actividades portuarias desconociendo el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación.
- 49.11 No cumplir las obligaciones contenidas en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, y que se encuentren relacionadas con las funciones de la Superintendencia de Transporte.
- 49.12 Afectar la prestación del servicio público por no contar con las instalaciones y la infraestructura necesaria para ello.
- 49.13 Prestar servicios por fuera de sus instalaciones y/o diferentes a los relacionados con las actividades portuarias que le han sido autorizadas.
- 49.14 No garantizar el eficiente enturnamiento portuario entendido como agendamiento de citas o asignación de turnos para camiones de ingreso a los puertos, ni implementar mecanismos técnicos y/u operativos o de cualquier otra índole para estos fines.
- 49.15 No implementar procesos y procedimientos eficientes para el ingreso de vehículos de transporte al puerto.
- 49.16 No contratar laboralmente al personal necesario para la prestación de servicios portuarios y el cumplimiento de sus obligaciones como sociedad portuaria.
- 49.17 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo superior a la establecida en las normas existentes.
- 49.18 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las valuaciones médico-ocupacionales, o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.
- 49.19 Contratar la prestación del servicio con empresas que vinculen vehículos de transporte de carga con omisiones en su registro inicial.

Artículo 50. *Operadores portuarios.* Los operadores portuarios serán responsables por:

- 50.1 Ejercer la prestación de actividades portuarias o de comercio en general dentro de los puertos sin el registro como operador portuario emitido por la Superintendencia de Transporte.
- 50.2 Ejecutar sus actividades por fuera de las zonas autorizadas, o prestar servicios de operador portuario diferentes a los autorizados.
- 50.3 Fijar las tarifas o modificar aquellas que estén reguladas, sin tener en cuenta los parámetros fijados por la normativa aplicable, o cobrarlas por fuera de los valores fijados, si hay lugar a ello.
- 50.4 Aplicar tarifas de manera discriminatoria, en contravía de los intereses de las empresas que desarrollan actividades portuarias, sin perjuicio de la competencia asignada por ley a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 50.5 Cobrar tarifas que no cubran los costos de operación de la sociedad portuaria, sin perjuicio de la competencia asignada por ley a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 50.6 No contar con condiciones, equipos e instalaciones necesarias e idóneas para atender los servicios que ofrece.
- 50.7 No vigilar o constatar que quienes participan en la operación portuaria estén afiliados al sistema de seguridad social.

Artículo 51. *Tripulantes de embarcación fluvial.* Los tripulantes de una embarcación fluvial serán responsables por:

- 51.1 Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales.
- 51.2 Permitir que en una embarcación de servicio público para transporte de pasajeros se transporten bienes que no cumplan las condiciones mínimas de tenencia, seguridad y salubridad señaladas en las normas legales y reglamentarias correspondientes.
- 51.3 Cuando los tripulantes de una embarcación inicien operaciones del puerto o lugar de inicio de prestación del servicio de transporte sin el permiso de zarpe.
- 51.4 No contar con el permiso de zarpe cuando el convoy atraque en un puerto intermedio de su itinerario, con el propósito de recoger botes cargados u otros botes que se tomen en dicho puerto.
- 51.5 Cuando al transitar por un canal navegable no se mantiene lo más cerca posible del límite exterior del canal por el costado de estribor.

- 51.6 Conducir una embarcación sin llevar izada en un lugar visible la bandera nacional con los datos de identificación, o portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación.
- 51.7 Portar en el lugar destinado a la identificación de la embarcación distintivos similares a esta o que la imiten o que impidan su plena identificación.
- 51.8 No informar a la autoridad fluvial competente el cambio de motor o color de una embarcación.
- 51.9 Transportar carne, pescado o alimentos perecederos en embarcaciones que no cumplan las condiciones de sanidad y conservación fijadas por la autoridad competente.
- 51.10 No portar el equipo de prevención y seguridad requerido en la reglamentación o normatividad correspondiente.
- 51.11 No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por la autoridad fluvial.
- 51.12 Prestar servicio en ruta no autorizada.
- 51.13 Negarse a prestar el servicio público sin justa causa legal.
- 51.14 Alterar o no contar con los documentos que respaldan la operación de la embarcación.
- 51.15 Atracar la embarcación en sitios desfavorables al usuario.
- 51.16 Realizar el cargue o descargue de una embarcación en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.
- 51.17 Transportar carga que exceda los límites de dimensiones y peso permitidos de acuerdo a la capacidad de carga de la embarcación.
- 51.18 No atracar la embarcación en un sitio dentro del muelle o puerto, asignado por la autoridad fluvial o portuaria competente.
- 51.19 No contar con un equipo de comunicaciones o no mantenerlo en servicio cuando es exigido por las diferentes reglamentaciones de acuerdo con el tipo de operación autorizada.
- 51.20 No cumplir con las condiciones técnicas de seguridad y sanidad mínimas exigidas por el reglamento.
- 51.21 Tripular embarcaciones menores entre las dieciocho (18:00) horas y las cinco (5:00) horas, sin encontrarse dentro de las excepciones previstas en la norma.
- 51.22 En el caso de las embarcaciones menores, no disminuir al mínimo la velocidad durante la navegación, en los casos previstos por el reglamento.
- 51.23 En las embarcaciones menores, no disponer de un motor con la potencia recomendada o con un motor determinado por el fabricante o en su defecto por la autoridad fluvial.
- 51.24 En las embarcaciones con motor fuera de borda, no portar, entre otros repuestos, bujías, hélices, pines de acero o platinas.
- 51.25 En las embarcaciones menores dedicadas al servicio público de transporte de pasajeros, no contar con la estructura adecuada que garantice la seguridad, integridad y comodidad de los usuarios.
- 51.26 Desamarrar la embarcación sin haber encendido previamente el motor.
- 51.27 Conducir una embarcación con identificación falsa.
- 51.28 Presentar documentos alterados. Esta infracción también dará lugar a la inmovilización de la embarcación.
- 51.29 Transitar sin los dispositivos luminosos establecidos en la normatividad vigente.
- 51.30 Conducir una embarcación de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel, sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas; o que no esté debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normativa técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que no cumpla con las medidas ambientales y de seguridad fluvial correspondientes.
- 51.31 Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción.
- 51.32 Navegar realizando maniobras altamente peligrosas, siempre y cuando la maniobra viole las normas de tránsito fluvial, ponga en peligro a las personas o las cosas y constituya una conducta dolosa o altamente imprudente.
- 51.33 Una embarcación que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel que tiene en la patente de navegación.
- 51.34 Llevar sobrecupo de pasajeros, bienes o carga.
- 51.35 Modificar o alterar las características o condiciones aprobadas para la construcción de la embarcación.
- 51.36 Tripular una embarcación que se encuentre al servicio de empresas de transporte cuya habilitación, licencia, registro, autorización o matrícula se les haya suspendido o cancelado, o cuando el permiso de operación se encuentre vencido.
- 51.37 Prestar un servicio no autorizado. En este caso, la embarcación será inmovilizada por primera vez por el término de cinco (5) días; por segunda vez, veinte (20) días; y por tercera vez, cuarenta (40) días.

- 51.38 Intentar pasar a la embarcación o convoy que navega adelante, sin haber recibido la respuesta de que puede pasar sin peligro.
- 51.39 Tripular embarcaciones menores de pasajeros con motor fuera de borda sin tener en su estructura el tanque de gasolina aislado de la zona de pasajeros.
- 51.40 Para las embarcaciones menores, no entregar y exigir el uso del chaleco salvavidas a los pasajeros y a la tripulación, al momento de embarcarse, así como no portarlos durante todo el trayecto de la ruta. Para las embarcaciones mayores, no portar chalecos salvavidas suficientes para la totalidad de los pasajeros y miembros de la tripulación.
- 51.41 Abastecer de combustible a la embarcación con pasajeros a bordo.
- 51.42 Transportar en las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial de pasajeros productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general peligrosos para la salud, la integridad física o la seguridad de aquellos.
- 51.43 No conservar el franco bordo definido en la patente de navegación.
- 51.44 Abandonar una embarcación de servicio público con pasajeros.
- 51.45 Contaminar las vías fluviales.
- 51.46 Transportar mercancías de contrabando, o de sustancias, productos o elementos ilegales o de origen ilegal. Adicionalmente, la situación deberá ponerse en conocimiento de las autoridades competentes, y se pondrá a disposición de estas el equipo o vehículo y tales géneros.
- 51.47 Conducir una embarcación, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la patente de navegación.

#### CAPÍTULO V

##### **Del régimen de usuarios del sector transporte**

Artículo 52. *Deberes de los usuarios del sector transporte.* Son deberes de los usuarios del sector transporte, además de los previstos en la Ley 1480 de 2011 y demás normas especiales, los siguientes:

- 52.1. Observar las condiciones de seguridad establecidas durante la prestación del servicio público de transporte.
- 52.2. Hacer uso de terminales de transporte, puertos, aeropuertos y demás servicios conexos que sean de carácter obligatorio y se encuentren debidamente habilitados para los efectos.
- 52.3. Acatar y respetar las instrucciones dadas por el personal que apoya la operación del servicio público de transporte, así como no perturbar el orden o la disciplina en la terminal, puerto, marina o a bordo del equipo utilizado para transportarse.

Artículo 53. *Obligaciones de los prestadores de servicios a los usuarios del sector transporte.* Quienes presten servicios a los usuarios del sector transporte serán responsables por el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley, las normas que regulan las actividades del sector aeronáutico, la Ley 1480 de 2011, normas del sector transporte, y aquellas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan. En especial, serán responsables por:

- 53.1 La idoneidad, calidad y seguridad en la prestación del servicio.
- 53.2 La información proporcionada a los usuarios.
- 53.3 La publicidad, promociones y/u ofertas que emitan.
- 53.4 El cumplimiento de las disposiciones en materia de protección contractual.
- 53.5 El cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio electrónico.

Artículo 54. *Sanción al pasajero perturbador.* El pasajero del servicio público de transporte que ponga en riesgo la seguridad de la operación, incite al desorden, profiera ofensas o insultos contra las personas que prestan el servicio y/o los demás pasajeros, podrá ser sancionado de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en las normas especiales para el sector aeronáutico y cuya competencia se encuentre en cabeza de la autoridad aeronáutica.

Artículo 55. *Normas aplicables a la relación de consumo en el sector transporte.* Las relaciones de consumo existentes en el sector transporte, así como los derechos y deberes de los usuarios, estarán reguladas por esta ley, las normas que regulan las actividades del sector aeronáutico, las normas del sector transporte, y, en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011.

Artículo 56. *Infracciones a los derechos de los usuarios de las empresas de transporte terrestre habilitadas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por carretera.* Sin perjuicio de las demás infracciones consagradas en la ley, son infracciones a los derechos de los usuarios del transporte terrestre de pasajeros las siguientes conductas:

- 56.1 No transportar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino.
- 56.2 La no emisión de un tiquete o billete, o la emisión de uno que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley o los fijados por la Superintendencia de Transporte en virtud de su facultad de instrucción.
- 56.3 No prestar el servicio de transporte en los términos y condiciones anunciadas al usuario.

56.4 Permitir el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados para dichos efectos.

56.5 La pérdida, daño o destrucción del equipaje del pasajero.

56.6 No contar con equipos debidamente señalizados, acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas en condición de discapacidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013 y demás normatividad que resulte concordante.

56.7 No contar con el personal capacitado para la atención de personas en condición de discapacidad.

56.8 Utilizar, permitir, patrocinar, promover, tolerar o practicar el pregoneo o actos similares y emplear sistemas, o mecanismos que coarten al usuario la libertad de elección de la empresa transportadora de su preferencia, para promover la venta de tiquetes dentro de las terminales de transporte.

56.9 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Artículo 57. *Infracciones a los derechos de los usuarios de las empresas de transporte terrestre habilitadas para la prestación del servicio público de transporte mixto.* Sin perjuicio de las disposiciones consagradas en la ley, son infracciones de los derechos de los usuarios del transporte mixto las siguientes conductas:

57.1 No transportar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino.

57.2 No prestar el servicio de transporte en los términos y condiciones anunciadas al usuario.

57.3 La pérdida, daño o destrucción del equipaje o carga transportada.

57.4 Permitir el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados para dichos efectos.

57.5 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Artículo 58. *Infracciones a los derechos de los usuarios de las empresas de transporte terrestre habilitadas para la prestación del servicio público de transporte especial.* Sin perjuicio de las disposiciones consagradas en la ley, son infracciones de los derechos de los usuarios del transporte especial las siguientes conductas:

58.1 No transportar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino.

58.2 No prestar el servicio de transporte en los términos y condiciones anunciadas al usuario.

58.3 La pérdida, daño o destrucción del equipaje del pasajero.

58.4 Prestar el servicio de transporte escolar sin acompañante mayor de edad, con capacitación mínima en primeros auxilios.

58.5 En el caso de transporte de estudiantes, no realizar las paradas para el descenso de los estudiantes de la manera en la cual lo dispone la regulación en la materia.

58.6 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Artículo 59. *Infracciones a los derechos de los usuarios de las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte de carga.* Sin perjuicio de las disposiciones consagradas en la ley, son infracciones de los derechos de los usuarios del transporte de carga las siguientes conductas:

59.1 La no emisión y entrega de la remesa terrestre de carga, manifiesto de carga, carta de porte o conocimiento de embarque.

59.2 No prestar el servicio de transporte de carga en los términos y condiciones anunciadas al usuario.

59.3 La pérdida, avería y/o retardo en la entrega de la cosa transportada.

59.4 No informar al usuario respecto de las consecuencias de no declarar el monto de las cosas remitidas o hacerlo con un valor que no corresponda con la realidad.

59.5 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo no tienen efecto alguno en materia de servicios postales, cuya competencia y regulación serán las dispuestas en la Ley 1369 de 2009 y demás disposiciones del régimen de servicios postales.

Artículo 60. *Infracciones a los derechos de los usuarios de los organismos de apoyo al tránsito.* Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la ley, constituyen infracciones a los derechos de los usuarios por parte de los organismos de apoyo al tránsito las siguientes conductas:

60.1 No almacenar, ni registrar, ni custodiar o alterar la información relativa a los procesos de certificación aprobados o rechazados, por cada usuario o vehículo atendido, y los demás informes de las evaluaciones efectuadas, de acuerdo con los parámetros que para el efecto establezca la normativa que los rige.

60.2 Expedir certificaciones sin dar cumplimiento a los procedimientos y requisitos legales previstos para los efectos por las disposiciones vigentes.

60.3 Expedir constancias de exámenes, sin dar cumplimiento a los procedimientos y requisitos legales previstos para los efectos por las disposiciones vigentes.

60.4 Prestar el servicio a pesar de encontrarse en firme la sanción de suspensión o cancelación de la habilitación.

60.5 Haber puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes en desarrollo de su actividad.

60.6 No reportar la información de los usuarios en los tiempos fijados en las normas técnicas correspondientes o, en su defecto, a más tardar dentro del día siguiente a la finalización de la actividad correspondiente.

60.7 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Artículo 61. *Infracciones a los derechos de los usuarios de las empresas de transporte acuático.* Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la ley, constituyen infracciones de los derechos de los usuarios por parte de las empresas de transporte acuático las siguientes conductas:

61.1 No transportar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino.

61.2 La no emisión de un tiquete o billete o la emisión de uno que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley o los fijados por la Superintendencia de Transporte en virtud de su facultad de instrucción.

61.3 No prestar el servicio de transporte en los términos y condiciones anunciadas al usuario.

61.4 La pérdida, daño o destrucción del equipaje.

61.5 No proporcionar a cada uno de los usuarios un chaleco salvavidas o carecer de equipos de primeros auxilios, bombas de achique y cualquier otro implemento que fuera necesario para garantizar la vida, seguridad, e integridad del usuario.

61.6 Embarcar o desembarcar personas en muelles o cualquier sitio no autorizado.

61.7 No transportar a animales guías de personas en condiciones de discapacidad.

61.8 No transportar a enfermos o heridos, ni prestar asistencia cuando las circunstancias así lo exijan.

61.9 Embarcar o desembarcar personas, animales o carga en muelles o cualquier sitio no autorizado generando riesgos de seguridad para estos.

61.10 Las demás conductas que se encuentren previstas en otras normas y que constituyan una violación de los derechos de los usuarios.

Artículo 62. *Mecanismo de asesoría en terminales.* Los terminales de transporte deberán contar con al menos un (1) empleado capacitado en el régimen de protección de usuarios del sector transporte, cuya función será dar asesoría a los usuarios respecto de sus derechos y los mecanismos con los que cuentan para presentar peticiones, quejas

o reclamos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en las normas especiales para el sector aeronáutico.

La forma de capacitación, la periodicidad de la misma, y demás aspectos relacionados con esta serán determinados por la Superintendencia de Transporte.

Artículo 63. *Facultades administrativas de la Superintendencia de Transporte en materia de usuarios.* Además de las previstas en otros artículos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo previsto en las normas especiales para el sector aeronáutico, la Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección de usuarios:

63.1 Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas por la ley, así como ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente en error o que se cause o agrave el daño o perjuicio a los usuarios.

63.2 Ordenar las medidas necesarias para que cese el daño o perjuicio a los usuarios por la violación de las normas sobre protección de usuarios.

63.3 Difundir el conocimiento de las normas sobre protección al usuario y publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas por violación a dichas disposiciones y las causas de la sanción. La publicación mediante la cual se cumpla lo anterior, se hará por el medio que determine la Superintendencia de Transporte y será de acceso público.

63.4 Ordenar al prestador del servicio reintegrar las sumas pagadas en exceso y el pago de intereses moratorios sobre dichas sumas a la tasa vigente a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo, en los casos en que se compruebe que el usuario pagó un precio superior al anunciado, o que a pesar de su pago el servicio no le fue prestado.

63.5 Definir de manera general el contenido, características y sitios para la indicación pública de precios.

63.6 Ordenar modificaciones a los clausulados generales de los contratos de adhesión, cuando sus estipulaciones sean contrarias a lo previsto en esta ley o afecten los derechos de los usuarios.

Parágrafo. Los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las facultades de control y vigilancia respecto de la protección de los derechos de los usuarios de transporte dentro del radio de acción local.

Para ello podrán imponer multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,

a favor del Tesoro Nacional, previo procedimiento establecido en la presente ley. Cuando el alcalde considere procedente imponer una medida distinta, o una multa superior a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, remitirá lo actuado a la Superintendencia de Transporte para que decida.

Contra la decisión de los alcaldes procede el recurso de apelación que será resuelto por la Superintendencia de Transporte.

Es obligación de los alcaldes informar al Ministerio Público la iniciación de la respectiva actuación.

## TÍTULO V

### CONDUCTAS SANCIONABLES DEL RADIO DE ACCIÓN METROPOLITANO, DISTRITAL Y MUNICIPAL

#### CAPÍTULO I

##### **Infracciones a las normas de transporte terrestre**

Artículo 64. *Propietarios, poseedores o tenedores de equipos.* Los propietarios, poseedores o tenedores de equipos destinados al servicio público de transporte en el radio de acción metropolitano, distrital y municipal, serán responsables por:

- 64.1 No mantener el vehículo en óptimas condiciones de operación y seguridad.
- 64.2 No aportar oportunamente los documentos necesarios para tramitar los documentos que respaldan la operación de los vehículos.
- 64.3 Abandonar o negarse, sin justa causa, a la prestación del servicio público de transporte.
- 64.4 No retirar los distintivos de la empresa de la cual se desvincula.
- 64.5 No hacer el aporte correspondiente al fondo de reposición, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable y en el contrato de vinculación.
- 64.6 Destinar el vehículo para servicios diferentes a los autorizados por la empresa y sin el consentimiento de esta.
- 64.7 Permitir, promover, tolerar o realizar la prestación del servicio público de transporte con equipos que hayan cumplido su vida útil o su tiempo de uso, cuando haya lugar.
- 64.8 Obstruir o no cumplir con el plan de rodamiento dispuesto por la empresa para la prestación del servicio público de transporte.
- 64.9 No acatar las instrucciones del representante legal de la empresa de transporte para la prestación del servicio público de transporte.
- 64.10 Tolerar la prestación del servicio público de transporte sin el cumplimiento de las obligaciones de tránsito y transporte que le asisten para ello.
- 64.11 Permitir la prestación del servicio con conductores que no estén afiliados al sistema de seguridad social, según lo prevean las

disposiciones vigentes sobre la materia. Para la prestación del servicio público de transporte individual, en caso de reincidencia dentro de los 6 meses siguientes a la primera infracción el propietario perderá el derecho de asignación de matrícula en la capacidad transportadora global.

- 64.12 Alterar la tarifa, cuando esta se encuentre regulada.
- 64.13 Permitir la prestación del servicio sin portar la tarjeta de control o portando la tarjeta de control vencida.

Artículo 65. *Conductores de equipos.* Los conductores de equipos destinados al servicio público de transporte en el radio de acción metropolitano, distrital y municipal, serán responsables por:

- 65.1 No informar al propietario, poseedor, tenedor del equipo o a la empresa de las fallas o desperfectos del equipo que afecten la prestación del servicio público de transporte.
- 65.2 Transportar mercancía que supere los límites de pesos y dimensiones establecidos por las disposiciones legales o reglamentarias, sin portar los respectivos permisos.
- 65.3 Transportar un número de pasajeros que excedan la capacidad establecida en la ficha técnica de homologación.
- 65.4 Prestar el servicio de transporte de carga sin portar los documentos de transporte.
- 65.5 Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo en sitios no establecidos por la empresa de servicio público de transporte.
- 65.6 No permitir la práctica aleatoria de la prueba de alcoholimetría y sustancias psicoactivas en la infraestructura de transporte.

Artículo 66. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto.* Las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto en el radio de acción metropolitano, distrital y municipal, serán responsables por:

- 66.1 Prestar el servicio público de transporte, sin cumplir o mantener los requisitos habilitantes exigidos por la normatividad vigente.
- 66.2 Prestar el servicio público de transporte, con equipos que no cuenten con los documentos de tránsito y/o documentos de transporte exigidos por la normatividad vigente.
- 66.3 Prestar el servicio público de transporte con equipos que superen la vida útil o tiempo de uso fijada en la normatividad vigente.
- 66.4 No realizar el mantenimiento preventivo y correctivo exigido en la normatividad vigente sobre todos los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte; ni contar con los respectivos soportes, los cuales no podrán ser objeto de alteraciones o enmendaduras.

- 66.5 No controlar la actividad y estado de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 66.6 No contratar los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de acuerdo con los requerimientos legales.
- 66.7 No vigilar ni constatar la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 66.8 No efectuar, cuando sea el caso, la afiliación al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte.
- 66.9 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por la autoridad competente, cuando haya lugar.
- 66.10 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, de conformidad con las normas vigentes.
- 66.11 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes, de acuerdo con los requerimientos legales.
- 66.12 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en equipos no homologados para esta modalidad de servicio, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 66.13 Permitir la prestación del servicio público de transporte en equipos que no cumplan con los equipamientos y características necesarios para las condiciones de accesibilidad, calidad y seguridad.
- 66.14 No presentar a la Superintendencia de Transporte oportunamente el programa de seguimiento y control de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio, o su equivalente, o a la que corresponda según la ley.
- 66.15 No contar con los equipos mínimos de capacidad transportadora autorizada.
- 66.16 No expedir a los propietarios de los equipos vinculados la documentación en la cual se discriminen los rubros y montos cobrados y pagados por cada concepto derivado del contrato de vinculación.
- 66.17 No gestionar, obtener o suministrar oportunamente los documentos de transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo cuando este haya entregado a la empresa, dentro de los términos legales o reglamentarios, la documentación requerida para dicho trámite.
- 66.18 Cobrar a los propietarios de los equipos por concepto de pago de la prima de los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, un valor mayor al realmente facturado por la compañía de seguros, cuando a ello haya lugar.
- 66.19 Negarse, sin justa causa legal, a expedir paz y salvo, cuando haya lugar.
- 66.20 Retener, sin justa causa, los documentos de transporte.
- 66.21 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados a comprar acciones o participaciones de la empresa.
- 66.22 Cobrar por la expedición de los documentos de transporte.
- 66.23 Permitir la operación de los equipos con los cuales se presta el servicio público de transporte, sin portar los distintivos de la empresa o los señalados por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes sobre la materia.
- 66.24 Negarse sin justa causa a prestar el servicio público de transporte.
- 66.25 Alterar la tarifa, cuando esta se encuentre regulada.
- 66.26 Permitir la prestación del servicio público de transporte llevando pasajeros de pie, cuando ello no estuviera autorizado.
- 66.27 Exigir sumas de dinero o constitución de garantías por la expedición de paz y salvo para la vinculación o desvinculación de los equipos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales.
- 66.28 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los equipos vinculados o a los conductores, presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte. No obstante las empresas de transporte podrán, de común acuerdo con el propietario, adquirir, con cargo al contrato de vinculación, seguros adicionales que tengan como finalidad asegurar la indemnización de las víctimas de siniestros.
- 66.29 No mantener actualizado el estado de habilitación en el registro mercantil.
- Artículo 67. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros.* Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros serán responsables por:

- 67.1 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.
- 67.2 No reportar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente, en los plazos determinados, la relación del equipo con el cual presta el servicio público de transporte.
- 67.3 No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa, o no reportar el plan de rodamiento en los plazos establecidos o su modificación a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente.
- 67.4 Permitir la prestación del servicio público de transporte en vehículos sin Tarjeta de Operación, sin portarla en el vehículo o con esta vencida.
- 67.5 Permitir la prestación del servicio público de transporte excediendo la capacidad transportadora autorizada.
- 67.6 No tener constituido fondo de reposición de acuerdo con la normativa aplicable.
- 67.7 Dar uso indebido y/o manejar irregularmente los dineros recaudados para el fondo de reposición, contrariando lo que para el efecto determine la normativa aplicable.
- 67.8 Negarse, sin justa causa, a expedir oportunamente la Planilla de Viaje Ocasional.
- 67.9 Dejar y recoger pasajeros en sitios diferentes a los autorizados por la autoridad competente.
- 67.10 Pactar con los conductores esquemas con mecanismos de remuneración que incentiven la competencia con otros conductores en la vía.
- 67.11 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 67.12 No mantener los vehículos en óptimas condiciones de operación y seguridad.
- 67.13 No contar con una ficha técnica de mantenimiento por cada uno de los equipos, que contenga, entre otros requisitos, la identificación del mismo, la fecha de revisión, las reparaciones efectuadas, los reportes, el control y el seguimiento. La ficha no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras.
- 67.14 Permitir la operación de los vehículos, sin tener los elementos de identificación de rutas, el color o distintivo especial señalado por las autoridades para diferenciar el nivel de servicio o las tarifas que deben cobrar dichos automotores.
- 67.15 No suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos, tarifas y horarios, o suministrar información engañosa, errada, inoportuna y/o incompleta.
- 67.16 Incumplir las condiciones de la autorización que haya otorgado la autoridad de transporte a los convenios de colaboración empresarial o a los acuerdos comerciales.
- 67.17 Permitir la prestación del servicio excediendo el número de pasajeros, de conformidad con lo establecido en la tarjeta de operación del vehículo.
- 67.18 Despachar servicios en rutas o recorridos no autorizados.
- 67.19 Permitir o tolerar el cambio del recorrido o trazado de la ruta que le ha sido autorizado.
- 67.20 Disminuir injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50%, de acuerdo con los permisos de operación, por más de quince (15) días consecutivos.
- Artículo 68. *Empresas de transporte de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi.* Las empresas de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, serán responsables por:
- 68.1 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.
- 68.2 No mantener actualizada, frente a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente, la relación del equipo con el cual presta el servicio público de transporte.
- 68.3 No reportar oportunamente a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente la información de los conductores que se encuentren registrados ante la empresa.
- 68.4 Permitir la prestación del servicio público de transporte en vehículos sin Tarjeta de Operación, sin portarla en el vehículo o con esta vencida.
- 68.5 Exigir sumas de dinero por la expedición de paz y salvo, para la vinculación o desvinculación de los vehículos.
- 68.6 No capacitar anualmente a todo el personal de conductores y personal afín, en materias relacionadas con la prestación del servicio, la seguridad vial, atención al usuario, competencias en conducción y mecánica como mínimo.
- 68.7 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 68.8 Permitir la prestación del servicio excediendo el número de pasajeros, de conformidad con lo establecido en la tarjeta de operación del vehículo.
- 68.9 Permitir la prestación del servicio sin portar la tarjeta de control o portando la tarjeta de control vencida.

- 68.10 No suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos, tarifas, o suministrar información engañosa, errada, inoportuna y/o incompleta.
- 68.11 Vincular a la empresa o prestar el servicio en vehículos no homologados para esta modalidad de servicio por la autoridad competente.
- 68.12 Permitir la operación de los equipos por personas sin los documentos de tránsito y transporte vigentes.
- 68.13 No contar con las respectivas fichas técnicas de mantenimiento exigidas en la normatividad vigente por cada uno de los equipos, que contengan, entre otros requisitos, la identificación del mismo, la fecha de revisión, las reparaciones efectuadas, los reportes, el control y el seguimiento. Las fichas no podrán ser objeto de alteraciones o enmendaduras.

Artículo 69. *Empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio público de transporte mixto metropolitano, distrital y municipal.* Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto metropolitano, distrital y municipal serán responsables por:

- 69.1 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.
- 69.2 No reportar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente, en los plazos determinados, la relación del equipo con el cual presta el servicio público de transporte.
- 69.3 No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la empresa, o no reportar el plan de rodamiento en los plazos establecidos o su modificación a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente.
- 69.4 Permitir la prestación del servicio público de transporte en vehículos sin Tarjeta de Operación, sin portarla en el vehículo o con esta vencida.
- 69.5 Permitir la prestación del servicio público de transporte excediendo la capacidad transportadora autorizada.
- 69.6 Negarse, sin justa causa legal, a expedir los paz y salvos, de conformidad con los requerimientos de la normatividad vigente.
- 69.7 Exigir, constreñir u obligar, directa o indirectamente, a los propietarios de los vehículos vinculados o a los conductores a presentar y/o comprar seguros o productos adicionales a los establecidos en la normativa aplicable para la operación del transporte. No obstante las empresas de transporte podrán, de común acuerdo con el propietario, adquirir, con cargo al contrato de vinculación, seguros adicionales que tengan como finalidad asegurar la indemnización de las víctimas de siniestros.
- 69.8 Negarse, sin justa causa, a expedir oportunamente la Planilla de Viaje Ocasional.
- 69.9 Dejar y recoger pasajeros en sitios diferentes a los autorizados por la autoridad competente.
- 69.10 Pactar con los conductores esquemas con mecanismos de remuneración que incentiven la competencia con otros conductores en la vía.
- 69.11 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 69.12 No tener implementado el fondo de reposición, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- 69.13 No hacer el aporte correspondiente al fondo de reposición, cuando de acuerdo con la normativa aplicable.
- 69.14 Dar uso indebido y/o manejar irregularmente los dineros recaudados para el fondo de reposición, cuando de acuerdo con las normas sea obligatorio disponer de este.
- 69.15 No devolver el dinero del fondo de reposición a quien corresponda una vez se desvincule el equipo de la empresa.
- 69.16 Prestar el servicio público de transporte en rutas, horarios, frecuencias o zonas de operación diferentes de las que le fueron autorizadas.
- 69.17 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio público de transporte.
- 69.18 Permitir la prestación del servicio excediendo el número de pasajeros, de conformidad con lo establecido en la tarjeta de operación del vehículo.
- 69.19 No iniciar la prestación del servicio público de transporte en el término señalado en el acto administrativo correspondiente, en caso que así se haya establecido por la autoridad competente.
- 69.20 Disminuir injustificadamente el servicio autorizado en más de un 30%, de acuerdo con los permisos de operación, por más de quince (15) días consecutivos.
- 69.21 Exigir sumas de dinero por la expedición de paz y salvo para la vinculación o desvinculación de los vehículos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales.
- 69.22 Cobrar una tarifa diferente a la establecida, cuando esta se encuentre regulada.

Artículo 70. *Zonas diferenciales de transporte.* El incumplimiento a lo dispuesto en los reglamentos de carácter especial y transitorio que se expidan por parte de las autoridades de transporte competentes en el radio de acción municipal,

distrital o metropolitano en forma coordinada con el Ministerio de Transporte, en materia de servicio de transporte público o servicios de tránsito con aplicación exclusiva en las zonas diferenciales para el transporte, darán lugar a la imposición de multas conforme a lo previsto en la presente ley.

## CAPÍTULO II

### **Operadores de sistemas integrados de transporte masivo, estratégicos de transporte público e integrados de transporte público**

Artículo 71. *Operadores de sistemas integrados de transporte masivo, estratégicos de transporte público e integrados de transporte público.* Las empresas operadoras de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público e Integrados de Transporte Público, serán responsables por:

- 71.1 No demostrar ni mantener el aseguramiento de calidad en la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, conforme lo establece la normativa aplicable.
- 71.2 No suministrar la información solicitada por el Gobierno nacional, que permita evaluar las condiciones técnicas, económicas y financieras de los sistemas cofinanciados por la Nación.
- 71.3 Establecer como fuente de sostenimiento de la empresa la afiliación de vehículos.
- 71.4 No administrar, operar y programar flota destinada a la prestación del servicio.
- 71.5 No dar cumplimiento a los planes de operación y programación, acción o mejoramiento aprobados por la autoridad competente.
- 71.6 No afiliarse al sistema de seguridad social a los conductores de los equipos, según lo prevean las disposiciones vigentes sobre la materia.
- 71.7 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por el Ministerio de Transporte.
- 71.8 No capacitar anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero con discapacidad.
- 71.9 No contar con el personal capacitado para la atención de personas con discapacidad.
- 71.10 Pactar con los conductores esquemas con mecanismos de remuneración que incentiven la competencia con otros conductores en la vía.
- 71.11 Realizar acuerdos o convenios que, directa o indirectamente, deriven en afectaciones a la prestación del servicio de transporte.
- 71.12 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.
- 71.13 No contar con equipos debidamente señalizados, o acondicionados o accesibles según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas con discapacidad.
- 71.14 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 71.15 No implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no realizar las evaluaciones médico-ocupacionales o no realizar las evaluaciones médicas de aptitud establecidas por los reglamentos o los planes de seguridad, a través de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud u organismos de apoyo que cuenten con habilitación por parte de los ministerios de Transporte y Salud y Protección Social, así como con acreditación en la norma técnica médica que para tal efecto expidan los referidos ministerios.
- 71.16 No cumplir con los niveles de servicio específicos en cuanto a cobertura, frecuencias y tipología vehicular.
- 71.17 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en equipos no homologados para esta modalidad de servicio por el Ministerio de Transporte o por quien haga sus veces.
- 71.18 Permitir la operación de los equipos por personas sin licencia de conducción, sin la licencia requerida para el tipo de vehículo que se opera, o con la licencia de conducción vencida, suspendida o cancelada.
- 71.19 Prestar el servicio con vehículos que no se encuentren en adecuadas condiciones de funcionamiento y seguridad.
- 71.20 Permitir la prestación del servicio en vehículos conducidos por personas que hayan consumido alcohol o que estén bajo efectos de sustancias psicoactivas.
- 71.21 No dar cumplimiento a los cronogramas de vinculación de la flota requerida para la prestación del servicio.
- 71.22 Permitir que el conductor aprovisione o manipule el vehículo con gasolina, ACPM o gas propano, cuando lleve pasajeros en su interior.

Artículo 72. *Entes gestores de sistemas integrados de transporte masivo, estratégicos de transporte público e integrados de transporte público.* Los entes gestores de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público e Integrados de Transporte Público, serán responsables por:

- 72.1 No administrar ni ejecutar los recursos aportados por la nación o el ente territorial

en los términos previstos en el convenio de cofinanciación.

- 72.2 No adoptar ni ejecutar las medidas y mecanismos necesarios para realizar la adecuada planeación, construcción e implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público, Integrados de Transporte Público e Integrados de Transporte Regional.
- 72.3 No permitir ni suministrar información necesaria para el seguimiento a los convenios de cofinanciación por parte de los ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con sus competencias.
- 72.4 No ejecutar el manejo financiero del proyecto de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- 72.5 No adoptar las decisiones que correspondan frente a los incumplimientos de los operadores del servicio, así como de los operadores de recaudo.
- 72.6 Destinar los recursos de la tarifa a componentes que no se encuentran previstos en los contratos vigentes.
- 72.7 No adoptar las medidas conducentes a lograr la accesibilidad y cobertura del servicio.

**Artículo 73. Operadores de recaudo de sistemas integrados de transporte masivo, estratégicos de transporte público e integrados de transporte público.** Las empresas operadoras de recaudo, del Sistema de Gestión y Control de Flota, y del Sistema de Información al usuario de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público e Integrados de Transporte Público, serán responsables por:

- 73.1 No prestar el servicio de recaudo en las condiciones de atención y cobertura requeridas para la adecuada prestación del servicio de transporte.
- 73.2 No contar con información veraz y oportuna respecto de los viajes y transacciones realizadas dentro del sistema.
- 73.3 Destinar los recursos recaudados por concepto de la prestación del servicio, de manera permanente o transitoria, a fines distintos a los ordenados en los contratos suscritos con el ente gestor.
- 73.4 No contar con los equipos (software, hardware, mecanismos de control centralizados e integrados) requeridos para la prestación del servicio en condiciones adecuadas de funcionamiento.

### CAPÍTULO III

#### **Transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM)**

**Artículo 74. Infracciones para las empresas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM).** Las empresas de

servicio público de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM), serán responsables por:

- 74.1 No informar a la autoridad de inspección, vigilancia y control de transporte competente cualquier cambio de sede o domicilio.
- 74.2 No contar con una ficha técnica de mantenimiento por cada uno de los equipos, que contenga, entre otros requisitos, la identificación del mismo, la fecha de revisión, las reparaciones efectuadas, los reportes, el control y el seguimiento. La ficha no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras.
- 74.3 No capacitar anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero con discapacidad.
- 74.4 No contar con el personal capacitado para la atención de personas con discapacidad.
- 74.5 No contar con equipos debidamente señalizados o acondicionados o accesibles, según lo establecido en la normativa aplicable, para facilitar el transporte de las personas con discapacidad.
- 74.6 Permitir que las estaciones y anexidades no cuenten con un adecuado programa arquitectónico que incluya: servicios complementarios, salas de espera, servicios sanitarios, facilidades para personas discapacitadas, maleteros, servicios de comunicaciones para el público, oficinas de administración y señalización.
- 74.7 No desarrollar, a través de las entidades autorizadas, los programas de medicina preventiva y capacitación establecidos por el reglamento respectivo.
- 74.8 No contratar a los tripulantes de los equipos con los cuales se presta el servicio público.
- 74.9 Permitir, tolerar, autorizar o exigir una jornada de trabajo a quienes tengan a su cargo la operación de los equipos destinados al servicio público de transporte, superior a la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.
- 74.10 Apostar anuncios publicitarios en la vía, de tal manera que obstruyan las señales o que pongan en riesgo la operación.
- 74.11 No someter a exámenes médicos, teóricos, técnicos y prácticos en la especialidad correspondiente al personal operador o auxiliar del equipo.
- 74.12 No corresponder el diseño de los equipos con el uso propuesto.
- 74.13 No contar los equipos con las especificaciones técnico-mecánicas que exigen las normas internacionales y del fabricante. Las especificaciones técnicas de

la vía y de los equipos deben corresponderse mutuamente.

- 74.14 Operar o permitir la operación de sus equipos por tripulantes que no se hayan realizado anualmente un examen médico para determinar la capacidad física, mental y de coordinación motriz, a través de entidades certificadoras de personas.
- 74.15 Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en vehículos no homologados para esta modalidad de servicio por el Ministerio de Transporte o por quien haga sus veces.
- 74.16 Permitir la operación de los equipos por personas no idóneas, sin el permiso o licencia requerida, o con esta vencida, suspendida o cancelada.
- 74.17 Permitir la prestación del servicio en equipos tripulados por personas que hayan consumido alcohol o que estén bajo efectos de sustancias psicoactivas.
- 74.18 No cumplir con las normas internacionales en materia de manipulación, transporte y almacenamiento de mercancías.
- 74.19 Negarse, sin justa causa, a prestar el servicio a personas con notoria discapacidad o movilidad reducida.
- 74.20 No contar con el manual de operación establecido por la normatividad vigente.
- 74.21 No contar con las pólizas de seguros de responsabilidad exigidas por la normatividad vigente.
- 74.22 No contar con un sistema de información que garantice el seguimiento en línea y en tiempo real de la operación.
- 74.23 No contar con centros de control de tráfico, que permitan el reporte en línea y en tiempo real de información a la autoridad competente.
- 74.24 Cobrar una tarifa diferente a la establecida, cuando esta se encuentre regulada.

Artículo 75. *Entes gestores.* Los entes gestores de sistemas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM), serán responsables por:

- 75.1 No adoptar ni ejecutar las medidas y mecanismos necesarios para realizar la adecuada planeación, construcción e implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público, Integrados de Transporte Público e integrados de transporte regional.
- 75.2 No permitir ni suministrar información necesaria para el seguimiento a los convenios de cofinanciación por parte de los ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con sus competencias.

75.3 No ejecutar el manejo financiero del proyecto de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

75.4 No adoptar las decisiones que correspondan frente a los incumplimientos de los operadores del servicio, así como de los operadores de recaudo.

75.5 Destinar los recursos de la tarifa a componentes que no se encuentran previstos en los contratos vigentes.

75.6 No adoptar las medidas conducentes a lograr la accesibilidad y cobertura del servicio.

Artículo 76. *Los operadores de recaudo.* Las empresas operadoras de recaudo, de Sistemas de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM), cuando incurran en las siguientes conductas:

76.1 No prestar el servicio de recaudo en las condiciones de atención y cobertura requeridas para la adecuada prestación del servicio de transporte.

76.2 No contar con información veraz y oportuna respecto de los viajes y transacciones realizadas dentro del sistema.

76.3 Destinar los recursos recaudados por concepto de la prestación del servicio, de manera permanente o transitoria, a fines distintos a los ordenados en los contratos suscritos con el ente gestor.

76.4 No contar con los equipos (software, hardware, mecanismos de control centralizados e integrados) requeridos para la prestación del servicio en condiciones adecuadas de funcionamiento.

## TÍTULO VI

### SANCIONES

Artículo 77. *Sanciones a imponer por la Superintendencia de Transporte.* La Superintendencia de Transporte podrá imponer las sanciones previstas en este artículo por la inobservancia de las normas contenidas en esta ley:

77.1 Amonestación y orden administrativa: Consistirá en la exigencia perentoria al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio o actividad portuaria que ha generado su conducta. La orden administrativa podrá adoptarse como única medida, o como complemento de cualquiera de las demás sanciones.

Impuesta la amonestación e impartida la orden administrativa, cuando el sancionado se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto administrativo podrá imponer multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables entre una y otra multa para que cumpla lo ordenado.

La multa de que trata este inciso se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado

de la solicitud de explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para presentarlas. La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resolución únicamente procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.

77.2 Multas: Las multas oscilarán entre uno (1) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos constitutivos de la infracción o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo.

77.3 Suspensión de la habilitación o autorización expedida por el Estado para desarrollar una actividad económica, hasta por un término de 24 meses.

77.4 Cancelación de la habilitación o autorización expedida por el Estado para desarrollar una actividad económica.

77.5 Inhabilitar a la empresa sancionada para la solicitud de habilitación de la prestación de servicio, hasta por un término de 24 meses.

77.6 Suspensión del registro de operador portuario, hasta por un término de 6 meses.

77.7 Cancelación del registro de operador portuario.

77.8 Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.

77.9 Cierre definitivo del establecimiento de comercio.

77.10 Orden de retiro definitivo de una página web, portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado.

77.11 Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han facilitado, tolerado, colaborado, autorizado o ejecutado conductas contrarias a la normatividad del sector transporte, se les podrá imponer multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción o del último hecho tratándose de conductas continuadas; y la prohibición de ejercer el comercio y/o de celebrar contratos de concesión y/o de interventoría hasta por cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.

77.12 Ordenar, de conformidad con las disposiciones legales existentes, la inmovilización o retención de vehículos.

77.13 Multas sucesivas hasta por mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes

o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.

77.14 Cuando por las características de la infracción así lo amerite, ordenar a los usuarios la devolución de las sumas de dinero pagadas por estos.

Parágrafo 1°. En adición a las sanciones que sean procedentes en cada caso, la Superintendencia de Transporte podrá adoptar las medidas pedagógicas que estime convenientes, entre otras, la orden al sujeto sancionado de publicar en medios de comunicación la sanción que le fue impuesta, y la adopción de programas de cumplimiento y capacitación.

Parágrafo 2°. El pago de la multa, así como el cumplimiento de las demás formas de sanción, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, incluyendo, pero sin limitarse a la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la infracción, ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella. Las multas tendrán como destino el presupuesto de la Superintendencia de Transporte.

Parágrafo 3°. En todos aquellos casos en que la sanción de suspensión o cancelación de las habilitaciones, licencias, registro o permisos puedan afectar gravemente la prestación del servicio público de transporte o actividad portuaria en detrimento de la comunidad, se preferirá, por una sola vez, la imposición de multa.

Parágrafo 4°. Las sanciones relacionadas con el sector aeronáutico, se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos aeronáuticos y demás normas que regulan las actividades del sector transporte, y lo no establecido en ellas, en lo dispuesto en la presente ley.

Parágrafo 5°. En tratándose de la suspensión o cancelación de la habilitación o autorización expedida por el Estado respecto de los organismos de apoyo al tránsito, los usuarios podrán realizar o culminar el trámite solicitado en otro organismo de apoyo al tránsito.

Para los efectos de la presente disposición, el organismo de apoyo al tránsito, a elección del usuario, reintegrará la totalidad de los valores cancelados por el programa, o garantizará la prestación del servicio por parte de otro organismo de apoyo al tránsito.

Parágrafo 6°. Sin perjuicio de las sanciones que en cada caso resulten procedentes, cuando el mismo sujeto haya sido sancionado tres veces dentro del mismo año calendario y por la misma infracción, una vez las mismas se encuentren ejecutoriadas, a solicitud de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte suspenderá la habilitación o autorización de la empresa por 3 meses o, en caso de no tener habilitación, se ordenará el cierre del establecimiento de comercio, la suspensión de la plataforma tecnológica o página web por 180 días.

Parágrafo 7°. La Superintendencia de Transporte podrá ordenar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una orden previamente impartida.

Parágrafo 8°. Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Transporte y por las demás autoridades y/o entidades que vigilan el cumplimiento de la normatividad del sector podrán ser tenidas en cuenta por las Entidades Contratantes como criterio de valoración de puntaje para la adjudicación de contratos estatales provenientes de licitación pública.

Artículo 78. *Sanciones a imponer por las autoridades sancionadoras del nivel territorial.* Las autoridades sancionadoras del nivel territorial podrán imponer, dentro del marco de su jurisdicción, las sanciones previstas en este artículo por la inobservancia de las normas contenidas en esta ley que sean de su competencia:

78.1 Amonestación y orden administrativa: Consistirá en la exigencia perentoria al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio o actividad portuaria que ha generado su conducta. La orden administrativa podrá adoptarse como única medida, o como complemento de cualquiera de las demás sanciones.

Impuesta la amonestación e impartida la orden administrativa, cuando el sancionado se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto administrativo podrá imponer multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables entre una y otra multa para que cumpla lo ordenado.

La multa de que trata este inciso se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de la solicitud de explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para presentarlas. La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resolución únicamente procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.

78.2 Multas que oscilarán entre uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos constitutivos de la infracción o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo. Para el caso de las infracciones de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Estratégicos de Transporte Público e Integrados de Transporte Público y la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren (TRAM) las multas oscilarán entre los 100 y los 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

78.3 Suspensión de la habilitación o autorización expedida por el Estado para desarrollar una actividad económica, hasta por un término de 6 meses en los siguientes casos:

- a) Cuando el sujeto haya sido sancionado más de tres veces mediante providencias ejecutoriadas, por infracción a las normas de transporte en un período de un (1) año entre la comisión de la primera infracción y la fecha en que quede ejecutoriada la tercera.
- b) Cuando dentro de la oportunidad señalada por la autoridad competente no se acrediten las condiciones exigidas por esta para mejorar la seguridad en la prestación del servicio o en la actividad de que se trate.
- c) En los casos de reiteración o reincidencia por la prestación de servicios no autorizados, en un período de un año.
- d) Cuando su actividad u omisión haya puesto en riesgo o causado daños a personas y/o bienes y se pruebe dolo o culpa grave por parte del supervisado.
- e) Facilitar a terceros los documentos, equipos o implementos destinados al servicio, o permitir el uso de su razón social por terceros, para prestar o facilitar la prestación de servicios no autorizados.

78.4 Cancelación de la habilitación de las empresas de transporte que prestan el servicio en su jurisdicción, en los siguientes casos:

- a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad y financieras, que dieron origen a su otorgamiento, no corresponden a la realidad.
- b) Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados.
- c) Cuando en la persona jurídica del vigilado concurra cualquiera de las causales de disolución previstas en la ley o en sus Estatutos.
- d) Cuando la alteración del servicio se produzca como factor perturbador del orden público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación.
- e) Cuando dentro del término de tres años, posteriores a la ejecución de la sanción de suspensión, el supervisado sea encontrado responsable por la comisión de una nueva infracción que constituye causal de suspensión.
- f) Cuando no se acrediten los nuevos requisitos habilitación establecidos por la autoridad competente.

Parágrafo. La persona natural o jurídica a la que se imponga la sanción de cancelación no podrá solicitar licencia, permiso, habilitación o registro en

un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la impone.

El presente párrafo se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas, y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

Artículo 79. *Graduación de las sanciones.* Para efectos de graduar las sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- 79.1 La afectación en la prestación del servicio público de transporte.
- 79.2 El impacto negativo a los usuarios.
- 79.3 La adopción o no de medidas que razonablemente debieron ser implementadas con el fin de conjurar la situación.
- 79.4 Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
- 79.5 Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
- 79.6 Reincidencia en la comisión de la infracción.
- 79.7 Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
- 79.8 La conducta procesal del investigado.
- 79.9 Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
- 79.10 Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.
- 79.11 El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
- 79.12 El grado de participación del implicado.
- 79.13 Los ingresos operacionales o activos del infractor del año inmediatamente anterior.
- 79.14 La persistencia en el tiempo de una misma conducta infractora;
- 79.15 La disposición o no de buscar una solución adecuada a los usuarios.
- 79.16 La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes.
- 79.17 La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.

Parágrafo. En caso de reincidencia comprobada en relación con la misma falta cometida dentro de los tres (3) años anteriores y las mismas se encuentren debidamente ejecutoriadas, la Superintendencia de Transporte impondrá multa de mínimo 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

## TÍTULO VII

### DISPOSICIONES FINALES

Artículo 80. *Régimen de transición.* Las investigaciones administrativas que se hayan

iniciado al momento de entrar en vigencia la presente ley continuarán siendo tramitadas en los términos y con las consecuencias sancionatorias existentes al momento de su apertura.

Para lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 1762 de 2015, al momento de entrar en vigencia la presente ley, se aplicará el régimen establecido en la presente ley y en lo no contenido en esta las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales y jurídicas que presten servicios de transporte acuático deberán adecuarse a las disposiciones de que trata esta ley en un término que no puede exceder 10 años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Esta disposición aplica previo cumplimiento y concepto favorable de la Superintendencia de Transporte respecto de cada plan de promoción y prevención debidamente ordenado.

Artículo 81. *Derogaciones.* Deróguense a partir de la vigencia dispuesta en esta ley, todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 41 de la Ley 1ª de 1991, los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 50 y 51 de la Ley 336 de 1996, el artículo 9º de la Ley 105 de 1993, y artículos 77, 78, 79, 82, 83 de la Ley 1242 de 2008.

Artículo 82. *Vigencia.* Esta ley rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

  
 IVÁN DARIÓ AGUDELO ZAPATA  
 Senador de la República

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

*por medio de la cual se establece el régimen sancionatorio del sector transporte, se determina el procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones.*

#### 1. Objeto del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene por objeto establecer el régimen único sancionatorio del sector transporte, y determinar cuál es el procedimiento administrativo que guiará la actividad sancionatoria de la Autoridad cuando así corresponda.

Al tiempo, es necesario resaltar que esta es la segunda iniciativa que se presenta para entregarle a los colombianos, al sector transporte, un régimen sancionatorio claro, que responda a conductas y sanciones concretas y expresas tanto para autoridades sancionatorias como para todos los actores que intervienen en la cadena del sector. De manera que esta iniciativa no es menor, y el Congreso de la República tiene la responsabilidad con el país de entregarle un régimen que merece y que, además, contribuya a la formalidad, seguridad y legalidad en el sector transporte.

**2. Contexto**

Con este proyecto de ley se busca preservar los principios de reserva de ley y tipicidad en la determinación de las conductas que por él se establecen como infracciones dentro del sector transporte, siendo su propósito principal proteger el derecho fundamental al debido proceso administrativo de todos aquellos que pueden ser sujetos sancionables por parte de la Superintendencia de Transporte o de las autoridades locales que cuenten con competencias para ello, en la medida que se establece:

- i) La descripción de la conducta infractora que podría dar lugar a una investigación administrativa sancionatoria,
- ii) La determinación de la sanción por incurrir en esas conductas,
- iii) La autoridad competente para establecer la existencia o no de la conducta infractora, el responsable, y la aplicación de las correspondientes sanciones, y
- iv) El procedimiento aplicable en el trámite administrativo sancionatorio.

En contraste, lo que existe a la fecha es una gran dispersión normativa, con el agravante de que no todas las conductas sancionables y las sanciones que resultarían procedentes ostentan rango de ley, por lo que el proyecto de ley responde a una necesidad sentida del sector transporte: seguridad jurídica. Así, con el régimen único sancionatorio del sector transporte resulta claro que las autoridades y los vigilados tendrán certeza del marco jurídico –de fondo y procedimental– que les es aplicable, últimos quienes terminarán por ajustar sus actividades para no incurrir en infracciones, lo que a su vez impacta en la competitividad del sector al elevarse el estándar de cumplimiento en la prestación del servicio público de transporte, la protección del usuario y el estado de la infraestructura, entre otros.

En esa línea, en el proyecto de ley se establece un régimen sancionatorio integral que incluye todos los modos de transporte (a excepción del aéreo cuya regulación corresponde a la Aeronáutica Civil, parágrafo del artículo 55 de la Ley 105 de 1993, artículo 1875 del Código de Comercio), así como las concesiones, infraestructura y sus servicios conexos y complementarios.

De otra parte, pero en el mismo sentido, el proyecto de ley corrige la ausencia de algunas conductas sancionables en materia de transporte terrestre automotor, toda vez que el Decreto 3366 de 2003 fue declarado nulo por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de mayo de 2016, y esta era normativa que, en gran parte, establecía un repositorio de infracciones. Luego, entonces, ante la actual inexistencia de las referidas conductas, con el Proyecto también se pretende el resurgir de este imprescindible régimen sancionatorio, pero a nivel de ley, con las bondades de la certeza jurídica que fue mencionada párrafos atrás.

Frente al particular, es indispensable resaltar que mediante concepto del 5 de marzo de 2019 el

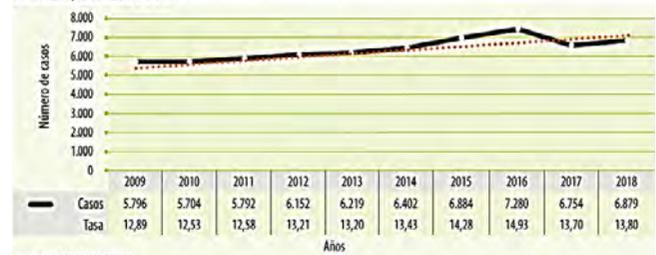
Consejo de Estado resaltó: i) el rol del legislador en el establecimiento de los regímenes sancionatorios, en la medida que respondía al principio de legalidad –que en estos asuntos involucra la reserva de ley y tipicidad–, y respetaba el derecho constitucional al debido proceso de los administrados; ii) la inexistencia de algunas conductas sancionables a nivel legal en el sector transporte con ocasión de la nulidad declarada mediante sentencia por la Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de algunos artículos del Decreto 3366 de 2003; y iii) la importancia de contar con un proyecto de ley que “otorgue seguridad jurídica al sector, que armonice la necesaria potestad sancionadora de la Administración, y las garantías que la Constitución establece para las personas sujetas a una actuación administrativa sancionatoria”.

De otra parte, el proyecto de ley contiene el régimen de protección al usuario del sector transporte, el cual, además de responder a la unificación de las normas de protección al usuario, contiene: i) las conductas en que podrían incurrir las empresas del sector en detrimento de los derechos de los usuarios, ii) las medidas que la autoridad puede ordenar con el único fin de proteger los derechos de los usuarios, y iii) la claridad en la normatividad aplicable en la materia.

Todo lo anterior es relevante frente a tres problemas que requieren de una autoridad con capacidad de hacer respetar el marco jurídico:

- i) Seguridad: en el mundo, los accidentes de tránsito generan i) **50 millones de lesionados por año**; y ii) 1.2 millones de muertos por año (más de 3000 defunciones diarias). Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha considerado los accidentes de tránsito como una epidemia. En Colombia, los accidentes de tránsito generan **39.537 lesionados por año, y 39.537 lesionados por año.**

Figura 1. Muertes por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia, años 2009-2018.



Fuente: INMLCF / GCRNV / SIRDEC. Nota: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020

Figura 2. Lesiones por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 habitantes. Colombia, años 2009-2018.



Fuente: INMLCF / GCRNV / SICLICO. Nota: Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 2005-2020

Y, los principales actores vulnerables son motociclistas, peatones y **usuarios de servicio público**.

- ii) Competitividad: el incumplimiento de normas le cuesta al país en términos de competitividad. En todos los reportes (Índice Global de Innovación Sistema Internacional de Indicadores de Competitividad (SIICO), Rule of Law Index, Doing Business, índice de desempeño logístico - Banco Mundial), Colombia presenta una debilidad en el indicador de “imperio de la ley” (o su homólogo).
- iii) Garantía en la prestación del servicio público: la prestación del servicio público de transporte requiere un marco sancionatorio que disuada efectivamente a los posibles infractores y los obligue a cumplir la ley, teniendo en cuenta que están involucrados derechos fundamentales y la prestación de un servicio público.

Finalmente, el proyecto de ley recoge buenas experiencias de otros regímenes sancionatorios para incorporar instituciones que permitan a la Superintendencia de Transporte y a las demás autoridades de transporte en su respectiva jurisdicción, realizar una supervisión inteligente en los mercados, a saber:

- i) Se incorpora la institución de la “significatividad” de las conductas, para que la autoridad esté obligada a priorizar las investigaciones que más afectación estén generando en los mercados.
- ii) Se permite a la autoridad tomar medidas preventivas para que, en los casos en los que haya méritos, se puedan tomar medidas en el sector que mitiguen la afectación del interés público.
- iii) Se incorporan herramientas que incrementan la probabilidad de detección de las infracciones, como por ejemplo con el mecanismo de beneficios por colaboración.
- iv) Se incrementa la pena por infringir la ley, para generar un efectivo poder disuasorio.
- v) Se prohíbe al infractor obtener garantías (seguros, pagarés, etc.) respecto de las multas que se le impongan.

Estas instituciones no son novedosas en regímenes sancionatorios y sí han probado ser efectivas para que el mercado opere en condiciones de legalidad. Al final, “(...) *el mercado económico no es un fenómeno natural, sino que depende de que el Estado establezca una serie de instituciones básicas, como el derecho de propiedad, la libertad contractual y un sistema de responsabilidad contractual y extracontractual cuya efectividad obedece a que exista una administración de justicia y una policía administrativa capaces de hacer respetar tales instituciones.*” (Corte Constitucional, 2003).

### 3. Consideraciones Jurídicas

Con el fin de observar con estricto el derecho constitucional al debido proceso administrativo y los principios de tipicidad y de reserva de ley, el Proyecto que se presenta:

- i) Describe quiénes son sus destinatarios, es decir, los sujetos que podrían ser declarados responsables por incurrir en las conductas sancionables, que, por supuesto, son aquellas personas naturales o jurídicas que integran o participan en el sector transporte o que pueden llegar a afectar la prestación del servicio público de transporte.
- ii) Las conductas o comportamientos que se especifican como infracciones y, por ende, sancionables por la autoridad, tal y como se advierte del texto resultan claras, es decir, comprensibles para sus destinatarios, así como concretas, es decir, cuentan con precisión y especificidad. Estas características generan certeza de su existencia por lo que serán tenidas como de posible concreción por parte de los destinatarios.
- iii) Determina las sanciones a imponer por las autoridades competentes, estableciendo todos los aspectos relativos a ellas, tales como su clase (amonestación, multa, suspensión, cancelación, órdenes, entre otras) y los mínimos y máximos que resultarían procedentes bien sea en dinero o en duración.

De igual forma, establece cuáles serán los criterios para la graduación o determinación de la sanción a imponer por parte del operador jurídico, de modo que la disposición de la graduación de sanciones sea el marco orientador del operador jurídico en la toma de sus decisiones, con lo cual se conjura cualquier posible desvío es la tasación sin mermar la discrecionalidad con la cual debe operar el funcionario y, en caso de que llegue a presentarse, el sancionado podrá advertirlo y así solicitar lo que en derecho considere pertinente.

- iv) Atribuye competencia a la Superintendencia de Transporte en el radio de acción nacional para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, con ocasión de la vulneración de las normas que regulan el sector transporte, la inobservancia de los derechos de los usuarios del sector transporte o cuando se incurre directamente en una conducta legalmente prohibida.

Esta competencia atribuida principalmente a la Superintendencia encuentra su justificación en la naturaleza propia de las superintendencias y los poderes reconocidos y otorgados a estas, pues, entre sus objetivos principales se encuentra el de “asegurar el respeto de la legislación en vigor (*control de legalidad*)”. (Jiménez Jaramillo, 1999).

Además, puntualmente, con esto se tiene en cuenta la delegación que hizo el señor Presidente de la República en el Decreto 2409 del 2018, a consecuencia de la cual se establece que la Superintendencia de Transporte ejerce como la máxima autoridad administrativa en el sector.

- v) Establece la competencia de las autoridades de transporte en cada jurisdicción o en quien estas deleguen para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar, con ocasión de la infracción de las normas que regulan el sector transporte y los derechos de los usuarios del sector en determinados supuestos.
- vi) Contiene un procedimiento administrativo sancionatorio que establece con claridad el trámite que debe seguirse por parte de las autoridades que investiguen presuntas infracciones a las normas del sector transporte y los derechos de los usuarios del sector.

Lo anterior, permite dar cumplimiento al requisito esencial de reserva de ley y otros que en materia administrativa sancionatoria han establecido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Consejo de Estado, por su parte, ha precisado:

*“En materia administrativa sancionatoria, como expresión de los principios democrático y de separación de poderes, es de competencia exclusiva del Legislador tipificar las infracciones y determinar las sanciones respectivas, mediante leyes o normas con fuerza material de ley, facultades que la Constitución no le atribuye al Ejecutivo.*

*(...) En otras palabras, es necesario que el Legislador incluya un contenido mínimo o adopte las decisiones básicas relativas a la definición, los alcances, los fines de las infracciones y sanciones, bajo lo que sería una carga mínima de intensidad normativa”.* (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, 2019).

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha indicado:

*“Al legislador no le está permitido delegar en el ejecutivo la creación de prohibiciones en materia sancionatoria, salvo que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, estos son: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición”.* (Corte Constitucional, 2015).

De manera que, corresponde al Congreso de la República de Colombia adoptar el régimen sancionatorio a que haya lugar, por estar reservada su competencia exclusiva para determinar la conducta infractora, establecer las sanciones que

resulten correspondientes, fijar el procedimiento administrativo y otorgar la competencia a la autoridad. Siendo así, este es un momento coyuntural para que el Congreso de la República responda y entregue al sector transporte su régimen único sancionatorio.

#### 4. Conclusión

El proyecto de ley contiene una propuesta de régimen único sancionatorio del sector transporte, que cumple con los requisitos necesarios establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para que pueda ser considerado como tal, el cual podrá ser incorporado en cualquier momento en el sistema jurídico colombiano por guardar plena correspondencia.

#### 5. Datos del proyecto de ley

Por lo expuesto, a continuación, se presenta la estructura del proyecto de ley:

5.1. Cantidad de artículos: 83.

5.2. Cantidad de títulos: 7.

5.3. Contenido del Proyecto:

- i) Título I “Disposiciones Generales”: El título incluye objeto, ámbito de aplicación, principios, carácter de las normas y definiciones.
- ii) Título II “Autoridades Competentes”: Se precisa que i) la Superintendencia de Transporte es la autoridad encargada de conocer en forma privativa para adelantar las acciones administrativas sancionatorias, y adoptar las medidas administrativas a que haya lugar con ocasión de la infracción a las normas que regulan el sector transporte y los derechos de los usuarios del sector transporte; ii) los sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte; y iii) las competencias de las autoridades con funciones de transporte en el radio de acción local.
- iii) Título III “Disposiciones Procedimentales”: El título incluye i) claridad frente a consecuencias de las infracciones de las normas de transporte - responsabilidad administrativa individual ante autoridades administrativas de supervisión, responsabilidad patrimonial ante Jueces de la República, responsabilidad penal ante Jueces de la República, y responsabilidad laboral y de seguridad social ante Jueces de la República; ii) procedimiento aplicable: CPACA y Código General del Proceso; iii) propósitos de las actuaciones administrativas: resaltando que la Superintendencia, a través de sus actuaciones velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente del sector transporte; iv) publicación de las actuaciones administrativas; v) medidas

preventivas: concebidas para precaver o superar situaciones concretas de grave alteración en la prestación del servicio público de transporte o vulneración de los derechos de los usuarios; vi) beneficios por colaboración: concebido en el régimen en los términos del artículo 50 del CPACA y para promover la colaboración con la autoridad sancionatoria; vii) pruebas por medios electrónicos; viii) reserva: precisión de actuaciones administrativas que mantienen o no tal calidad; ix) notificaciones y comunicaciones; y x) caducidad de la facultad sancionatoria.

- iv) Título IV “Conductas sancionables del radio de acción nacional”: El título incluye i) Capítulo I “Infracciones Generales”: Se describen las conductas en las cuales cualquier sujeto vigilado que participa en el sector transporte puede ser responsable; ii) Infracciones relacionadas con la infraestructura de transporte, iii) Infracciones a las normas de transporte terrestre; y iv) Conductas sancionables en el modo de transporte acuático; y v) Capítulo V: “Régimen de los usuarios del sector transporte”: en el cual se establecen, entre otras, los deberes específicos de los usuarios del sector, y, además, se determinan las normas aplicables a la relación de consumo en el sector transporte.
- v) Título V “Conductas sancionables del radio de acción metropolitano, distrital y municipal”: El título incluye una descripción clara y precisa de infracciones a las normas de transporte terrestre de radio de acción local.
- vi) Título VI “Sanciones”: Se establecen las sanciones específicas y la graduación de estas. Las sanciones son: i) amonestación y orden administrativa; ii) multas, las cuales oscilarán entre 1 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes; iii) suspensión de la habilitación hasta por un término de 24 meses; iv) cancelación de la habilitación; v) suspensión del registro de operador portuario hasta por un término de 6 meses; vi) cancelación del registro de operador portuario; vii) cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; viii) cierre definitivo del establecimiento de comercio; ix) orden de retiro definitivo de una página web en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado; x) inmovilización o retención de vehículos; y xi) devolución de sumas de dinero pagadas a usuarios.
- vii) Título VII “Disposiciones Finales”: Contiene i) el régimen de transición para las investigaciones administrativas ya iniciadas al momento de

entrar en vigencia la ley; ii) derogatorias de disposiciones y iii) entrada en vigencia.

## 6. Bibliografía

Congreso de la República. (21 de julio de 2009). Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia.

Congreso de la República. (12 de octubre de 2011). Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. (5 de marzo de 2019). Concepto. Sanciones administrativas en el transporte público terrestre automotor. Consejero Ponente: Germán Bula Escobar. 11001-03-06-000-2018-0017-00.

Corte Constitucional. (30 de agosto de 2000). Sentencia C-1141 de 2000. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional. (25 de febrero de 2003). Sentencia C-150 de 2003. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional. (18 de noviembre de 2015). Sentencia C-699 de 2015. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.

Jiménez Jaramillo, C. (1999). *Un régimen jurídico propio de las actividades de vigilancia y control*. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/1728>

Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015). Decreto 1079 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Presidencia de la República de Colombia. (24 de diciembre de 2018). Decreto 2409 de 2018. Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones.

  
 IVÁN DARIÓ AGUDELO ZAPATA  
 Senador de la República

SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Secretaría General ( Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)  
 El día 17 del mes Oct del año 2019  
 se radicó en este despacho el proyecto de ley  
 N°. 225 Acto Legislativo N°. \_\_\_\_\_, con todos y  
 cada uno de los requisitos constitucionales y legales  
 por: \_\_\_\_\_

  
 SECRETARÍA GENERAL

SECCIÓN DE LEYES  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL  
TRAMITACIÓN LEYES

Bogotá, D. C., 17 de octubre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 225 de 2019 Senado, *por medio de la cual se establece el régimen sancionatorio del sector transporte, se determina el procedimiento administrativo sancionatorio y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Iván Darío Agudelo Zapata*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Octubre 17 de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cumplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*